

PERÍODO 130°



REPÚBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

**5ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN ORDINARIA**

**9 DE MAYO DE 2012**

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, D. **AMADO BOUDOU**,  
y de la señora presidenta provisional del Honorable Senado,  
senadora **BEATRIZ ROJKÉS de ALPEROVICH**

Secretarios:

Señor D. **JUAN HÉCTOR ESTRADA** y señor D. **JUAN HORACIO ZABALETA**

Prosecretarios:

Señor D. **LUIS BORSANI**, señor D. **MARIO DANIELE**  
y señor D. **SANTIAGO EDUARDO RÉVORA**



## PRESENTES:

AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia  
 ARTAZA, Eugenio J.  
 BARRIONUEVO, Walter Basilio  
 BASUALDO, Roberto G.  
 BERMEJO, Rolando A.  
 BIANCALANI, Fabio D.  
 BLAS, Inés Imelda  
 BONGIORNO, María José  
 BORELLO, Marta Teresita  
 CABANCHIK, Samuel M.  
 CABRAL ARRECHEA, Salvador  
 CANO, José M.  
 CASTILLO, Oscar A.  
 CIMADEVILLA, Mario J.  
 COLAZO, Mario J.  
 CORRADI DE BELTRÁN, Ana María  
 CORREGIDO, Elena M.  
 DE LA ROSA, María Graciela  
 DI PERNA, Graciela A.  
 DÍAZ, María Rosa  
 ESCUDERO, Sonia M.  
 ESTENSSORO, María Eugenia  
 FELLNER, Liliana B.  
 FERNÁNDEZ, Aníbal D.  
 FUENTES, Marcelo J.  
 GIMÉNEZ, Sandra D.  
 GIUSTINIANI, Rubén H.  
 GODOY, Ruperto Eduardo  
 GONZÁLEZ, Pablo G.  
 GUASTAVINO, Pedro G.  
 GUINLE, Marcelo A.  
 HIGONET, María de los Ángeles  
 IRRAZÁBAL, Juan Manuel  
 ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle  
 JUEZ, Luis A.  
 LABADO, María Esther

LATORRE, Roxana I.  
 LEGUIZAMÓN, María Laura  
 LINARES, Jaime  
 LÓPEZ, Osvaldo R.  
 LORES, Horacio  
 LUNA, Mirtha María T.  
 MANSILLA, Sergio F.  
 MARINO, Juan C.  
 MARTÍNEZ, Alfredo A.  
 MEABE, Josefina A.  
 MONLLAU, Blanca M.  
 MONTERO, Laura G.  
 MORALES, Gerardo R.  
 MORANDINI, Norma E.  
 NIKISCH, Roy A.  
 PARRILLI, Nanci M.  
 PÉREZ ALSINA, Juan A.  
 PÉRSICO, Daniel R.  
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.  
 PICHETTO, Miguel Á.  
 RACHED, Emilio A.  
 REUTEMANN, Carlos A.  
 RIOFRIO, Marina R.  
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo  
 ROJKÉS de ALPEROVICH, Beatriz L.  
 ROLDÁN, José M.  
 ROMERO, Juan C.  
 RUIZ DÍAZ, Elsa Beatriz  
 SANZ, Ernesto R.  
 VERA, Arturo  
 VERANI, Pablo  
 VERNA, Carlos A.

## AUSENTES, CON AVISO:

FILMUS, Daniel F.  
 MAYANS, José M.  
 MENEM, Carlos S.  
 NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

## SUMARIO

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Izamiento de la bandera nacional.</b> (Pág. 9.)</li> <li>2. <b>Homenaje al dibujante y humorista Carlos Loiseau, Caloi.</b> (Pág. 9.)</li> <li>3. <b>Homenaje al filósofo e historiador Arturo Andrés Roig.</b> (Pág. 10.)</li> <li>4. <b>Homenaje a Alberto Olivera.</b> (Pág. 10.)</li> <li>5. <b>Asuntos entrados. Mensaje solicitando acuerdo.</b> (Pág. 11.)</li> <li>6. <b>Creación de Comisión Bicameral Investigadora. Moción de preferencia.</b> (Pág. 11.)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. <b>Plan de labor.</b> (Pág. 18.)</li> <li>8. <b>101ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.</b> (S.-588/12.) (Pág. 18.)</li> <li>9. <b>Declaración de emergencia en materia de combustibles. Moción de preferencia.</b> (Pág. 18.)</li> <li>10. <b>202º aniversario de la ciudad de Victoria, Entre Ríos.</b> (S.-1.185/12.) (Pág. 19.)</li> <li>11. <b>Plan de labor.</b> (Continuación.) (Pág. 19.)</li> <li>12. <b>Consideración en conjunto de órdenes del día.</b> (Pág. 19.)</li> </ol> |
|--|---|

Beneplácito por los 20 años de trabajo del Programa Ser en el Tratamiento de las Adicciones. (O.D. N° 188/12.)

Adhesión a la candidatura de la ciudad de Rosario como Sede de los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos a celebrarse en el año 2019. (O.D. N° 189/12.)

Beneplácito por la creación de la primera vacuna hecha en nuestro país contra la hídridosis. (O.D. N° 190/12.)

Beneplácito por el subcampeonato argentino obtenido en el 40° Mundial de Hókey sobre Patines. (O.D. N° 191/12.)

Pesar por el fallecimiento de Guido Falaschi. (O.D. N° 192/12.)

Beneplácito por los logros automovilísticos obtenidos por Pablo Peláez. (O.D. N° 193/12.)

Reconocimiento a Marisa Aizenberg por su compromiso con el derecho a la salud. (O.D. N° 194/12.)

Beneplácito por la distinción otorgada a Marcelo Bielsa por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. (O.D. N° 195/12.)

Beneplácito por la obtención del Balón de Oro por parte de Lionel Messi. (O.D. N° 196/12.)

Beneplácito por la actuación de los pilotos argentinos en la categoría cuatriciclos del Rally Dakar. (O.D. N° 197/12.)

Día Nacional de la Donación de Órganos. (O.D. N° 198/12.)

Beneplácito por el convenio celebrado entre la UBA y el Conicet, sobre creación de un laboratorio de inmunotoxicología. (O.D. N° 199/12.)

Beneplácito por el triunfo del equipo de hókey femenino nacional en el Champions Trophy disputado en Rosario, Santa Fe. (O.D. N° 200/12.)

Participación de dos veteranos de guerra en una competencia atlética en las islas Malvinas. (O.D. N° 201/12.)

Pedido de informes sobre el Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural. (O.D. N° 202/12.)

Revisión histórica del general Martín Miguel de Güemes. (O.D. N° 203/12.)

Beneplácito por la obtención del primer puesto en el LVI Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Brasilia 2001 por parte de un equipo de patinadoras santafesinas. (O.D. N° 204/12.)

Beneplácito por la creación del Primer Instituto Nacional de Medicina Tropical. (O.D. N° 205/12.)

13. **Modificación de la ley que regula los derechos del paciente en relación con los profesionales e instituciones de salud.** (O.D. N° 62/12.) (Pág. 24.)

14. **Derecho a la identidad de género.** (O.D. N° 269/12.) (Pág. 62.)

15. **Tratamiento en conjunto de proyectos sobre tablas.** (Pág. 86.)

Beneplácito por la entrega del Premio Alfaguara de novela al autor argentino Leopoldo Brizuela. (S.-889/12.)

Beneplácito por la entrega del Premio Hans Christian Andersen a la escritora María Teresa Andruetto. (S.-727, 794 y 891/12.)

Megaoperativo en el cual fueron incautados 280 kilos de cocaína. (S.-896/12.)

Realización del Campeonato Mundial FIM Maxxis de Enduro. (S.-899/12.)

Día Mundial de las Familias. (S.-900/12.)

Concurso Latinoamericano Argenjus 2012. (S.-901/12.)

Aniversario del natalicio del general doctor Alberto Marini. (S.-919/12.)

II Foro Nacional “Hacia otra economía”. (S.-944/12, O.D.N° 361 N.I.)

Jornadas de Derecho Administrativo “El derecho administrativo hoy. 16 años después”. (S.-1.078/12.)

II Jornada Nacional de Mujeres Abogadas. (S.- 142/12.)

II Jornadas “El pensamiento de Rodolfo Kusch”. (S.- 313/12.)

Expo Muebles Caimancito 2012. (S.-723/12.)

Día Internacional de los Monumentos y Sitios. (S.-724/12.)

Congreso Internacional de Educación, Salud y Desarrollo. (S.-1.150/12.)

X Exposición Nacional Braford y I Exposición del Ternero Braford. (S.-1.151/12.)

XII Expobúfalo Otoño 2012. (S.-1.152/12.)

Sesquicentenario del natalicio del educador y pensador correntino José A. Ferreyra. (S.-1.028/12.)

Pesar por el fallecimiento de la locutora Dahiana Strangis. (S.-1.187/12.)

Pesar por el fallecimiento del folklorista Gelacio Albarracín. (S.-1.188/12.)

Declaración de interés del proyecto licitatorio “Obras para el manejo de excedentes en los ríos Bermejo y Bermejito en las provincias de Chaco y Salta”. (S.-1.183/12.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del 202° aniversario de la fundación de la ciudad de Victoria, Entre Ríos. (S.-1.185/12.)

Homenaje al músico santiagueño Víctor Manuel “Vitillo” Ábalos. (S.-1.184/12.)

“Cirugía patria solidaria”. (S.-351/12.)

Identificación de un gen que permitirá a las plantas una mejor tolerancia del estrés hídrico y salino. (S.-581/12.)

IV Congreso Internacional de Derecho Disciplinario y II Jornadas Provinciales de Control Público. (S.-817/12.)

I Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho. (S.-1.116/12.)

I Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología. (S.-1.117/12.)

XXIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemática. (S.-1.118/12.)

Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de una escuela de Cutral Có, Neuquén. (O.D. N° 357/12 y S.-2385/11.)

Restitución del inmueble sito en avenida La Plata 1264. (S.-539/12.)

Acciones implementadas en materia de derechos humanos por el ex presidente Kirchner. (S.-546/12.)

## 16. Apéndice.

I. **Plan de labor.** (Pág. 88.)

II. **Asuntos entrados.** (Pág. 91.)

III. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 1501.)

IV. **Actas de votación.** (Pág. 1775.)

V. **Inserciones.** (Pág. 1779.)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 18 del miércoles 9 de mayo de 2012:

**Sr. Presidente.** — La sesión está abierta.

## 1

### IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente.** — Invito al señor senador por la provincia de Tierra del Fuego, Mario Jorge Colazo, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Colazo procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

## 2

### HOMENAJE AL DIBUJANTE Y HUMORISTA CARLOS LOISEAU, CALOI

**Sr. Presidente.** — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir homenaje al dibujante y humorista Carlos Loiseau, Caloi, manifestando pesar por su fallecimiento.

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario** (Estrada). — El Honorable Senado de la Nación declara su pesar por el fallecimiento del dibujante y humorista Carlos Loiseau, conocido popularmente como Caloi, ocurrido el 8 de mayo de 2012 en la ciudad de Buenos Aires.

Como historietista fue un creador inagotable. Publicó sus primeros trabajos en 1966 en la mítica revista *Tía Vicenta*. Desde entonces publicó ininterrumpidamente sus historias y personajes en *María Belén*, *Análisis*, *Clarín*, *El Gráfico*, entre otras importantes publicaciones de alcance nacional.

Fue el hacedor de varios personajes del humor gráfico argentino pero, sin duda, quedará immortalizado en “Clemente”, este simpático

Así que con estos breves conceptos, y reafirmando la voluntad política de mi bloque, vamos a pedir que se vote en general y en particular en una sola votación, porque queremos que esta tarde se convierta en ley esta sanción de la Cámara de Diputados.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Si hay acuerdo de los senadores, así se hará.

**Sra. Escudero.** – Pido la palabra.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

**Sra. Escudero.** – Si se va a votar en general y en particular en una sola votación, quiero dejar constancia del sentido del voto en particular de quien habla, del senador Basualdo y de la senadora Monllau. En particular, en el artículo 1º y en el inciso g) del artículo 2º, pedimos la eliminación de la expresión “de hidratación o alimentación”.

Que quede constancia de que ése es el sentido de nuestro voto y, de esa manera, votamos en general y en particular en una sola votación.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Así se hará, senadora.

Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Resultan 54 votos afirmativos. Unanimidad, con las salvedades que expresó la senadora Escudero respecto de sí misma, del senador Basualdo y de la senadora Monllau. (*Aplausos en las galerías.*)

– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>1</sup>

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Senador Castillo: sírvase manifestar su voto a viva voz.

**Sr. Castillo.** – Afirmativo.

**Sra. Parrilli.** – Y yo también afirmativo.

**Sr. Secretario** (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 56.

**Sra. Escudero.** – Pido la palabra.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

**Sra. Escudero.** – Pido perdón, pero omití nombrar al senador Reutemann. Es decir, seríamos los senadores Basualdo, Monllau, Reutemann y yo quienes mantenemos esa excepción en los artículos 1º y 2º.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Se deja constancia.

Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.<sup>2</sup>

**Sr. Pichetto.** – Pasemos al otro tema, señora presidenta.

## 14

(O.D.-269/12)

### DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Por Secretaría se dará cuenta del siguiente tema.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Corresponde tratar el Orden del Día N° 269, dictamen de las comisiones de Legislación General, y de Población y Desarrollo Humano, en el proyecto de ley venido en revisión sobre derecho a la identidad de género. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Pichetto.** – Pido la palabra.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Habíamos acordado la posibilidad de que representantes de las organizaciones involucradas pudieran estar en un número reducido en el recinto; pero recordamos a todos que en este espacio no se puede aplaudir ni gritar. Es un espacio que tiene un determinado funcionamiento que creo que hay que mantener. Por lo tanto, pedimos a los visitantes presentes, y que tienen derecho a observar el debate porque representan a esas organizaciones, que no aplaudan.

Está prohibido aplaudir en este ámbito. Está prohibido exteriorizar manifestaciones verbales y gritar. Está prohibido. ¿Qué le vamos a hacer? Es una norma que tiene este Senado. Esto no es un Concejo Deliberante ni una cancha de fútbol; es el Senado de la Nación.

**Sr. Giustiniani.** – Pido la palabra.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

<sup>2</sup> Ver el Apéndice.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

**Sr. Giustiniani**. – Señora Presidenta: recién estuvimos intercambiando pareceres entre los presidentes de bloques e interbloques. Por la dimensión que tiene la lista de oradores y porque, además, hubo muchas fundamentaciones conceptuales que también tienen relación con el tema que vamos a abordar, quiero proponer que hagamos una reducción de los tiempos de exposición: 10 minutos los miembros informantes –no 30– y 3 minutos –no 10– para los demás miembros de la lista.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – En consideración la moción del senador Giustiniani.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Aprobada por unanimidad.

**Sr. Pichetto**. – Así podemos acelerar el resultado de la votación.

Además, solicito que se autoricen las inserciones, señora presidenta.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Se van a votar los pedidos de inserción.

–Se practica la votación.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Aprobados.<sup>1</sup>

**Sr. Pichetto**. – Que se cierre la lista de oradores, señora presidenta.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Solamente restaría votar el cierre de la lista de oradores.

–Se practica la votación.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Aprobado.

Por Secretaría se le dará lectura.

**Sr. Secretario** (Estrada). – La lista está integrada por los siguientes señores senadores: Iturrez, Artaza, Fernández, Romero, Blas, Morandini, Rojkés de Alperovich, López, Godoy, Escudero, González, Cabanchik, Corregido, Martínez, Giménez, Di Perna, Luna, Riofrío, Sanz, Guinle, Morales, Corradi, Giustiniani, Petcoff Naidenoff y Pichetto.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Iturrez.

**Sra. Iturrez de Cappellini**. – Señora Presidenta: el proyecto de ley que hoy nos ocupa cuenta con la media sanción de la honorable Cámara de Diputados –es el C.D.-75/11–, otorga el derecho a la identidad de género y, en su artículo 2º, la define diciendo: “Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”.

Estamos hoy, también, en la búsqueda incansable de una sociedad menos desigual que quiere otorgar más derechos, reconocer más derechos y nunca cercenarlos.

Los principios de inclusión y de diversidad son directrices fundamentales que deben estar presentes en toda administración pública. Los desafíos son formular y gerenciar las políticas públicas con una fuerza de trabajo diversa, integrar a hombres, mujeres, ancianos, discapacitados y personas con diferentes orientaciones sexuales.

A lo largo de la historia, nuestro país ha sido pionero en sancionar leyes que garantizaron los derechos humanos. La abolición de la esclavitud, el juicio a las Juntas Militares y, más recientemente, la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario son clarísimos ejemplos –si se quiere, muy extremos– que certifican lo que estamos diciendo.

Señora presidenta: hace poco leí una frase a mi entender de un gran impacto, y créame que me movilizó notablemente, y lo voy a hacer de nuevo. Sentarse a mirar el éxito obtenido hasta acá es como detenerse. Siempre se debe saber cómo nos encontramos para seguir en la búsqueda y no dejar de estar atentos a las nuevas circunstancias y a realidades que no se pueden dejar de ver, porque existen y conviven con nosotros. Hay muchas personas que no la están pasando bien, que no pueden acceder a un trabajo digno ni a tener iguales derechos que sus semejantes. ¿Por qué? Porque practican y mantienen una sexualidad diferente. Es muy triste tener en nuestras manos la posibilidad de cambiar estas realidades que estoy resumiendo

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

y acotando y no hacerlo. ¿Qué más debemos esperar? ¿Más muertes? ¿Más vejaciones? ¿Más humillaciones? ¿Más maltratos?

Señora presidenta: seguramente, al final de este día habremos aprobado este proyecto de ley que significará oportunidades para todos por igual, oportunidades para ser incorporados, remunerados y promovidos. Todavía quedarán muchas cosas por hacer por la inclusión y la diversidad, pero vamos por más. Porque para mí, va de suyo e infiero que todos los legisladores, cuando pensamos o creamos una ley, tenemos un denominador común o el mismo punto de partida: la buena fe, esa buena intención que es, nada más y nada menos, que la creencia de estar legislando a favor de algo o a favor de mejorar algo: porque, como decimos los peronistas, “donde hay una necesidad, hay un derecho”. Éste es, a mi entender, otro de los principios rectores para aprobar esta ley.

Quiero aclarar que la aplicación de esta norma no sobrecarga la aplicación de justicia ni resulta onerosa, como también debemos dejar en claro que, si bien a algunos les generó algún tipo de dudas, cabe destacar que no se cambia el número de documento de las personas ni se sustituye a una persona por otra. Sólo se rectifica su identidad en su partida de nacimiento. ¿Sabe a quién obliga? Obliga al Estado, que ahora deberá y podrá, con esta sencilla herramienta, reconocer la identidad de género de la persona tal cual siente y a su autopercepción, y a disponer, a continuación, de todos los mecanismos registrales para permitirle a esa persona que se reasignó su género o no el desarrollo de su vida plenamente como quien siente y quiere ser.

El colectivo de personas trans en nuestro país está muy expuesto a vulneraciones de sus derechos desde la niñez: encuentran obstáculos para acceder a la educación porque el sistema no las reconoce, lo que a veces trae como resultado que ni siquiera puedan completar sus estudios primarios o secundarios; con lo cual también quedan imposibilitadas de acceder al mercado laboral, a una vivienda digna, a la alimentación, etcétera. De esta manera, se han visto privadas de los derechos básicos que son necesarios para una vida digna, y no debemos permitir que esto suceda dentro del marco de un Estado de derecho. La Argentina, nuestro país, es uno de los pocos en el mundo que cuenta con

legislación de protección a los derechos de las diversidades sexuales. La legislación comparada sostiene, en sus informes, que Bélgica, Países Bajos, Noruega y la Argentina forman parte de los pocos que cuentan con leyes condenatorias a los comportamientos homófobos.

En 1994, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que la prohibición y consecuente penalización de los comportamientos homosexuales vulneraban los derechos a la privacidad. El derecho internacional ha presentado una gran dinámica en cuanto a los derechos humanos, lo que ha llevado a reconocer derechos a los grupos que antes no se incluían: por ejemplo, a los grupos originarios y a las personas con diversas orientaciones sexuales.

Estas situaciones, señora presidenta, generan grandes impactos que fueron desarrollados por expertos en derechos humanos, varios de ellos relatores de la ONU. Buscan permanentemente garantizar el alcance universal de la protección de los derechos humanos a las personas homosexuales, bisexuales, transexuales y transgénero, cuyos derechos ya estaban incluidos implícitamente en el artículo 2º de la Declaración Universal bajo los genéricos o de cualquier otra índole o condición.

Créame, señora presidenta, que esta norma es una consecuencia de la ley de matrimonio igualitario, fundamentalmente, y también, de antecedentes en la provincia de Santa Fe de ordenanzas municipales y de actos de reconocimiento de la identidad de género autopercebida en algunas universidades.

Todos conocemos este proyecto de ley que cuenta con 15 artículos, incluyendo el de forma; y para su tratamiento tuvimos la posibilidad de recibir a todos los sectores que nos pidieron expresarse. Fue dictaminado con el 70 por ciento de los miembros integrantes de la Comisión de Legislación General, en su primer giro, y en igual porcentaje respecto de la de Población y Desarrollo Humano, por lo cual entiendo que debo ser muy breve para dar posibilidad a los demás oradores de hacer uso de la palabra. Estoy segura de que la discriminación disminuirá, y en gran medida así será porque debemos entender, de una buena vez, que la diversidad nos enriquece como un todo.

Quiero expresar un último concepto: para que el derecho a la igualdad y el ejercicio de los derechos humanos realmente existan, es necesario el reconocimiento de la identidad de género, y no tan sólo para que podamos dar cumplimiento efectivo a los tratados internacionales suscriptos por nuestro país sino también para que hagamos real, palpable y perfectamente visible la puesta en vigencia plena de los derechos y garantías que contiene nuestra Constitución Nacional.

Esta ley fortalecerá la profunda convicción de una persona en su sentir. Le garantizará que, desde el Estado, será tratada y tutelada como lo que siente que es; y seguramente, con el devenir de los tiempos, gozará del normal empoderamiento que necesite.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). — Tiene la palabra el senador Artaza.

**Sr. Artaza.** — Señora presidenta: creo que este proyecto de ley que hoy tratamos significa una gran conquista para los derechos humanos nuevamente en la Argentina.

La comunidad de transexuales y travestis es una de las más vulnerables históricamente, ya que desde el advenimiento de la democracia—o, incluso, antes— ésta era una materia pendiente con este sector. Digo vulnerable porque desde chicos, ya tenían ese desarraigo de la familia que después los llevaba a no completar la escuela. Han sido marginados también de la universidad. Finalmente, a lo único que se terminaba condenándolos, como casi única actividad, era al ejercicio de la prostitución dolorosamente.

Hoy estamos subsanando esta cuestión con esta ley, o es el comienzo de un camino. Toda esa marginación, esa represión, esa persecución, la discriminación permanente que se ha hecho sobre este sector no son compatibles con la democracia y con el Estado de derecho. Por eso, digo que hoy estamos reivindicando, de alguna manera, a un sector invisible para el sistema o el orden jurídico.

En la mayoría de los casos, esta comunidad, esta población, vive en extrema pobreza por no tener esos derechos sociales, culturales, políticos y económicos. Y creo que el Estado, indudablemente, debe garantizar no sólo la igualdad sino también la inclusión y la diversidad, que es donde, controversialmente, hay individualidades. Y en esa individualidad está la diversidad.

Entonces, sin duda, con esta ley estamos dando un paso enorme en esta legislación y seguramente no será el último, ya que tenemos a la democracia para ir perfeccionándola.

Quiero destacar, sobre todo, que estamos tratando un tema que es un prejuicio cultural, como lo hemos enfrentado también con la ley del matrimonio igualitario o con la que tocamos anteriormente. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, obviamente, ponemos al hombre como un fin en sí mismo; es decir, partimos desde el hombre filosóficamente, desde nuestros principios, y, por lo tanto, no estamos solamente acompañando este proyecto por estas circunstancias o por el reclamo intrínseco y justo de esta comunidad, de las organizaciones no gubernamentales y de las asociaciones que con tanto coraje y persistencia han insistido permanentemente en este reclamo de consagrar estos derechos sociales, culturales, económicos y humanos; en definitiva, un derecho humano básico a poder desarrollarse, a tener educación, a poder dignificarse. Entonces, nosotros, desde la Unión Cívica Radical, ponemos al hombre, al ser humano, como nuestro principio. Desde un partido históricamente humanista, filosóficamente acompañamos este proyecto de ley.

Hemos recibido diversos trabajos. Destaco el de la Universidad del Litoral de Santa Fe. Para algunos, ésta es una cuestión hasta escandalosa—tenemos que ser sinceros— por el prejuicio que significa el tratamiento de este proyecto que seguramente hoy se va a convertir en ley. Y quizá, para algunos pasa por una cuestión moral. Pero les pregunto: ¿puede haber algo más inmoral que la marginación, la discriminación, el maltrato y, a veces, la muerte? Porque según varios informes que hemos recibido, tienen una expectativa de vida de 36 años por enfermedades o por la colocación de implantes mamarios industriales que terminan llevándolos, finalmente, a la muerte.

Felizmente, como dijimos durante el tratamiento de diversas leyes o proyectos de ley, tenemos la democracia para perfeccionarlas. Son leyes que hay que ver con mucha perspectiva, como pasó con la del divorcio vincular y como va a pasar, seguramente, con la del matrimonio igualitario, con la que acabamos de votar hace unos minutos y con este proyecto de ley. Hay

que ver en perspectiva los derechos que está alcanzando hoy esta comunidad.

Tenemos el artículo 11 del proyecto, que seguramente debatiremos con un especialista como el doctor Cano y otros senadores aquí presentes, sobre todo, cuando se trata de la igualdad y de dar derecho a esta gente a través del programa médico obligatorio. Además, para igualar derechos. Es cierto que tal vez una persona a la que se saca un pecho, los subsistemas que tenemos, como las obras sociales o las prepagas, no la cubren. Debemos tratar de que la cubran. Seguramente, así como esto, es una cuestión pendiente, porque estamos hablando de salud pública y de derechos humanos.

Creo que tenemos pendiente –insisto– un seguro nacional de salud, que espero que muy pronto podamos tratar desde las legislaturas nacionales y provinciales. Es una de las banderas también del radicalismo, y los partidos nacionales y populares debemos bregar por él. Vemos lo que está ocurriendo, sobre todo, con las prepagas. Podemos advertir hoy, como un tema del día, que hemos sancionado una ley y hay prepagas que no la están cumpliendo; por ejemplo, con el tema de los 65 años. Imagínense ustedes el seguimiento que hay que hacer para este tipo de legislación. Y debemos estar atentos, además, con los controles del Estado para que se cumplan estas leyes. Nosotros legislamos, no debemos poner un obstáculo y decir, en el artículo 11, que no tendrán una cobertura de salud. Debemos tratar de que otras personas obtengan también ese mismo derecho. Pero tenemos la democracia para perfeccionar esto.

Desde la Unión Cívica Radical, creo que es un gran avance. Nosotros ponemos al hombre, como les decía, como un fin en sí mismo humanamente. No quiero abusarme de mi pequeña banca que tengo acá, pero por la representación importante que tengo de la provincia de Corrientes debo pedir, como parte integrante de uno de los poderes del Estado nacional del que formamos parte –por lo menos, la partecita que me toca representar en este momento–, perdón a esta comunidad por tanto maltrato, tanta discriminación, tanta burla y tanto dolor que, tarde pero justamente, estamos subsanando.

Éste recién es el comienzo. Habrá que hacer muchas modificaciones institucionales. Por supuesto que vamos a acompañar el proyecto.

Hoy, cuando sea sancionado este proyecto y se convierta en ley, se van a ir de acá seguramente no siendo ciudadanos de segunda, ya no como ciudadanos oscuros, invisibles; sino que hoy se van a ir de cara al sol.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

**Sr. Fernández.** – Señora presidenta: décadas de discriminación y dolor enmarcan la lucha por conquistar derechos de las características de los que vamos a sancionar hoy. Tiene razón en lo que dice el senador Artaza: mucho falta por recorrer.

Pero desde junio de 1969, en el bar Stonewall Inn, en Nueva York, cuando personas trans junto con gays, lesbianas y bisexuales se decidieron a enfrentar el acoso y la discriminación policial, arranca una lucha por los derechos que deberíamos haber tenido que tomar todos como banderas y empujarlas como tales. Fue un punto de partida de la lucha por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans.

La International Lesbian and Gay Association –ILGA, como la conocimos en la Argentina– dice que en América y el Caribe hay once naciones que todavía penalizan la homosexualidad, pero debo aclarar que en el resto de los países continúan rigiendo conductas que excluyen la orientación sexual no heterosexual.

¿Por qué en nuestro país no ha pasado esto antes? A lo mejor no se dieron las condiciones. No puede ser uno tan duro o crítico respecto de nuestros antecesores en estas bancas. No se han dado las condiciones; o los ministros o responsables de religiones o cultos han sido los que presionaron en cada uno de los pueblos para que los legisladores que venían a estas bancas no llevaran a la práctica ese tipo de discusiones. Pero la cuestión es que daba sus frutos esa crítica, porque conllevaba que todo ese universo fuera promovido al destrato y la discriminación, más destrato y más discriminación. Se le asignaba como carácter reproductivo a la experiencia sexual haciendo una diferencia entre relaciones normales y relaciones anormales. Y todo esto terminaba siendo, sin lugar a dudas, un enorme estigma sobre gays, lesbianas, bisexuales y trans, cargado inevitablemente de violencia.

Señora presidenta: no quiero ser autorreferencial, pero recuerdo cuando estaba en el Mi-

nisterio del Interior y escuché por primera vez hablar por televisión al presidente de la CHA. Él decía: “Nosotros no pintamos la Catedral porque nuestros problemas no se resuelven de esa manera, si no pintaríamos las catedrales”. Entonces, dije: “Este es un tipo con el que se puede hablar. Llámenlo, quiero hablar con ese tipo”. Comenzamos a trabajar con la CHA y con la Federación. ¡El trabajo fue espectacular! Había diez provincias que castigaban la homosexualidad, de las cuales nueve ya no están. Y vaya aquí mi homenaje al senador Barrionuevo, porque era gobernador de Jujuy cuando esto se resolvió. Y falta una sola provincia, cuyo gobernador ayer me dijo que en esta semana este asunto estaría resuelto.

En consecuencia, esto lo enancamos con la lucha de las Naciones Unidas y con tantos otros que han peleado por este tipo de derechos. Y quiero referirme a las Naciones Unidas y a esa reunión que se hizo en noviembre de 2006 en Yogyakarta, donde veintinueve especialistas en derechos humanos y en derecho internacional logran definir toda una política específica en el marco de los derechos humanos que le corresponden a gays, lesbianas, bisexuales y trans. En efecto, esos principios, que si bien no son oficialmente un estándar internacional, se toman como tales por Naciones Unidas y por la mayoría de los países.

Estamos en el centro de una discusión política, y hoy se va de acá un derecho conquistado por quienes han sido tantos años agraviados. Como dice el senador, yo le agregaría una disculpa más: no tuvimos ni supimos dictar lo que tendríamos que haber dictado en honor a la República y a la representación que ostentamos. Tendríamos que haberlo hecho mucho antes. No se pudo. Bendito sea Dios que lo estemos haciendo en el día de hoy.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

**Sra. Escudero.** – Señora presidenta: voy a hablar como miembro informante del bloque. Presidenta, cámbieme el tiempo. Presidenta, presidenta...

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). – Disculpe que no me he dado vuelta, pero ya le habían cambiado el tiempo.

**Sra. Escudero.** – Ah, bueno. Muchas gracias.

Quiero ratificar la posición positiva de nuestro bloque. Realmente es un momento en donde vamos a reparar la falta de acceso a derechos que son declamados universalmente, pero de los cuales no está gozando un colectivo de nuestro país.

De acuerdo con las propias cifras de estas organizaciones que hicieron sus encuestas –porque no hay relevamientos ni cifras oficiales– estaríamos hablando de unas 22 mil personas: un 64 por ciento sin haber completado sus estudios primarios; un 84 por ciento sin secundario; y un 95 por ciento en situación de prostitución. ¡Claro!, si no pudieron capacitarse y abandonaron la escuela justamente por la situación de discriminación.

En 2011, de trece crímenes de odio que registra la prensa, siete víctimas son travestis y seis gays. Con respecto al VIH, es una de las poblaciones más afectadas; y como dijo el senador Artaza, su expectativa de vida es de 35 años. De eso se trata este proyecto. Eso es lo que estamos reparando.

La ciencia médica ha ido evolucionando también en el tratamiento de estas personas, tal como lo hizo la jurisprudencia. Yo quiero rescatar el paso que en 2010 dimos en esta Cámara cuando aprobamos la nueva ley de salud mental, porque ahí la Argentina “despatologiza” esta situación.

En 1980, el *Manual de Diagnósticos y Desórdenes Mentales* considera la transexualidad como una patología, la llama “disforia de género”: patología psiquiátrica que lleva a la persona a comportarse, a vivir y a ser reconocida socialmente como integrante de un género diferente al sexo asignado al nacer. En 1984 se reemplaza el término “disforia de género” por “trastorno de la identidad de género”.

En 2010, nuestra ley de salud mental establece el principio de capacidad de todas las personas y prohíbe un diagnóstico de salud mental basado en la elección de la identidad sexual.

Y la jurisprudencia también fue variando: 1965-1974, prohibido el cambio de identidad sexual. En 1993 se hace lugar, pero siempre estableciendo que padecen un síntoma, una patología, etcétera. En 2001 se hace lugar a las demandas, pero piden contar con ese diagnóstico previo de disforia de género. En 2008 se

hace lugar a un pedido de cambio de nombre y reasignación sexual, pero se exige el diagnóstico de disforia de género.

Pero nuestra jurisprudencia también da un paso importante en 2010, cuando por primera vez hace lugar al cambio de nombre y de sexo sin necesidad de exigir previamente intervención quirúrgica de ninguna clase y sin solicitar diagnósticos patológicos en este sentido.

Quiero destacar que el fallo de la doctora Elena Liberatori, en el caso en el cual la peticionante era Florencia de la V, establece que la cuestión sexual y el género son cuestiones extramorales, que no hay un marco normativo que permita establecer géneros normales y patológicos. Se trata de admitir que la libertad y el reconocimiento son muy importantes para la dignidad humana.

Otro fallo de 2010 determina que no resultan pertinentes pericias o exámenes, en tanto su realización no sólo es innecesaria, sino que también constituye una instancia indebida de escrutinio estatal de aspectos privados de la personalidad. Es decir, ya nuestra jurisprudencia evoluciona. No hace falta un diagnóstico patológico ni ninguna exigencia de este tipo. Entonces, si ya no es necesario, no hace falta la judicialización; se puede resolver con un trámite administrativo. Hay dos precedentes, uno en Santa Fe y otro en Salta, donde se hace lugar al cambio de nombre y de sexo en el DNI, sin necesidad de intervención judicial. Y eso es lo que hace esta iniciativa.

El derecho a la identidad significa que puedo pedir el cambio de nombre de pila y el cambio de sexo en la partida de nacimiento y en el documento de identidad; trámite administrativo rápido, gratuito, personal. No necesito buscar un abogado para hacer este trámite.

Por otra parte, establece claramente qué pasa en el caso de los menores de edad, que es un tema delicado que hay que examinar bien. Debe ser con los representantes legales, con expresa conformidad del menor —y aquí entra a jugar la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes— y con asistencia del abogado del niño. Los efectos del trámite no modifican derechos y obligaciones jurídicas ni las provenientes del derecho de familia. Ésa era una de las preocupaciones que tenía la gente.

Nosotros colgamos en *Facebook* una opinión y la abrimos a que la gente diera su parecer. Una de las preguntas era ¿qué pasa con los derechos y obligaciones? No hay problema con los derechos y obligaciones. Lo importante es el número de documento de identidad y el apellido; no la conformación morfológica.

Hay confidencialidad; y es obligatorio mantenerla. Eso hace a este derecho. También están las notificaciones que se deben hacer al Renaper, al Registro de Reincidencia, Registro Nacional y a otros registros que sean necesarios, justamente para la protección de derechos y obligaciones jurídicas.

Se consagra así el derecho al libre desarrollo personal; y aquí es donde entra la cuestión del acceso a los tratamientos médicos.

Sé que hay senadores que tienen algunas objeciones a que se incorpore en el plan médico obligatorio el acceso a los tratamientos, a la intervención quirúrgica, a tratamientos hormonales, pero la verdad es que si las cifras nos muestran que el 95 por ciento de estas personas están fuera del acceso de los derechos, me parece que lo menos que podemos conceder es este derecho. Y digo esto porque en términos económicos el impacto es ínfimo, pero en términos de acceso a los derechos, el impacto es enorme.

Por eso, con absoluta convicción, vamos a votar a favor en general y en particular.

**Sra. Presidenta** (Rojkés de Alperovich). — Senadora: creo que todos nos vamos a quedar con ganas de tener un poquito más de tiempo.

Tiene la palabra la senadora Blas.

**Sra. Blas.** — Señora presidenta: el proyecto de ley que hoy nos ocupa y que considera el derecho a la identidad de género forma parte, sin lugar a dudas, de la política de derechos humanos instaurada por el doctor Carlos Néstor Kirchner y profundizada por nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Hace apenas algunos años, resultaba impensado encontrarnos dando este debate en la sociedad argentina y en este recinto. Fue necesario, para llegar a este día, comprender que el entramado social y su dinámica se encuentran conformados por la diversidad de pensamiento, de cultura, de ideologías, de usos y de costumbres, que nos diferencian a unos de otros, pero nos igualan frente a la ley.

El principio de igualdad se plantea justamente para evitar la discriminación, los criterios injustos, estigmatizantes y persecutorios, y al ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

**Sra. Blas.** — La filosofía política de la libertad refiere a un principio esencial como es el de la libertad de conciencia. Es decir que todo ser humano puede y tiene derecho a pensar y sentir según su razón, su fe o sus sentimientos le indiquen en materia política, social, religiosa o de cualquier otro orden y a actuar en consecuencia. Ello ha sido reconocido en el plano internacional a través del pronunciamiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1948.

La libertad de conciencia está unida al concepto de libertad de expresión, tolerancia y respeto mutuos. En este sentido, señor presidente, permítame recordar que la tolerancia significa respeto y consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, aun cuando no coincidan con las nuestras; reconoce el derecho del que piensa y siente distinto de nosotros. Y de eso se trata, del reconocimiento a un modo de sentir diferente de su naturaleza biológica y al derecho irrestricto de gozar de todas las garantías constitucionales que poseemos la mayoría de los ciudadanos argentinos.

La presente norma se orienta a reparar los derechos vedados al colectivo de la comunidad de la diversidad sexual, como el acceso a la identidad, la salud, la educación y el trabajo.

**Sr. Presidente.** — Senadora: si puede ir redondeando. Estamos muy justos con el tiempo.

**Sra. Blas.** — Sí, por favor.

Ser portador de la identidad que refleja su imagen abre, por sí, el acceso a derechos fundamentales, evitando prácticas discriminatorias. Dicho en otros términos, las incluye socialmente.

En mi provincia, como en tantas otras, estas minorías han sido reiteradamente víctimas de la discriminación, la exclusión social y la “invisibilización”, justamente, por la falta de políticas públicas inclusivas.

Para ir redondeando, iba a referirme a los derechos que les son vedados a estas comuni-

dades. Ya los han señalado algunos senadores: la educación, el trabajo, etcétera.

Voy a manifestar, entonces, que, en lo personal, he tenido la oportunidad de relacionarme con integrantes de la comunidad trans, que me transmitieron sus vivencias personales. La falta de oportunidades fue el denominador común en la mayoría de ellas; al igual que el esfuerzo por lograr el reconocimiento de la identidad, para lo cual tuvieron que acceder a la vía judicial; lo que lesiona el derecho a la intimidad.

En este orden de ideas, y en la convicción de que la sanción de esta iniciativa está propiciando la igualdad de oportunidades y derechos para todos, es que adelanto mi voto positivo al presente proyecto de ley.

Permítame, señor presidente, expresar finalmente mi reconocimiento a todas las comunidades de la diversidad sexual, pero muy especialmente a las que militan en Catamarca. Son ATA, la Asociación Civil Grupos Vulnerables, Vivís y la Mesa de Coordinación Técnica por la Diversidad Sexual y la Identidad de Género. Por su lucha, la que estuvo marcada por la perseverancia en la reivindicación de sus derechos.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra la senadora Morandini.

**Sra. Morandini.** — Señor presidente: ¡qué buena sesión! No venimos a administrar intereses y sí a consagrar derechos. En una misma sesión, consideramos dos proyectos que tienen un sustento común: la voluntad personal para decidir cómo se quiere morir y cómo se quiere vivir.

Cuando escuchaba y veía cómo se había organizado la sesión, no pude menos que reflexionar —porque es un viejo tema y obsesión en relación con nuestra sociedad— cómo nos es mucho más fácil hablar de la muerte y, sin embargo, cómo nos interpela la vida en su complejidad, en su variedad, en su multiplicidad.

En este sentido, tal vez tendríamos que haber hecho al revés, es decir, hablado primero de la vida y, después, del otro tema. Pero se modificó, y lo cierto es que, si los temas humanos no nos son ajenos, por su complejidad, variedad y, sobre todo, desde que el poder ya no dice cómo se debe vivir, qué se debe leer, cómo se debe vestir y a quién se debe llevar a la alcoba, tenemos que construir una auténtica cultura de derechos.

De modo que cuando hablamos de leyes para bien morir y para vivir como se quiere, en realidad son reglas de libertad; y como ésta se conjuga con dignidad, en realidad lo que venimos a hacer es consagrar derechos humanos.

No está mal que en este recinto se insista y se repita, para que quede internalizado de manera cultural, que los derechos humanos no se otorgan. No son la concesión de ningún gobernante bueno; no dependen de éste. Lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar los derechos que son intrínsecos a la condición humana. Ésta es una idea que viene a cambiar completamente. No es el Estado el que otorga y concede el derecho, sino que se trata del derecho que tiene la ciudadanía; es el derecho que tienen las personas, quienes nos increpan como legisladores para que, finalmente, garanticemos esos derechos.

De modo que nuestra obligación como senadores es garantizar esos derechos en un país como el nuestro, que ha denunciado la violación, pero le resta todavía construir valores compartidos y una auténtica cultura de igualdad.

Por eso, la norma es fundamental para garantizar esos derechos y para colocarlos en manos de las personas; y no como ha sucedido y continúa ocurriendo en nuestro país que aquellos que detentan un poder, cualquiera sea, se apropien de sus vidas, cuerpos e identidad. Porque no existe una auténtica cultura de derechos humanos cuando todos quedamos mucho más desprotegidos frente a los excesos del poder.

Hoy venimos a consagrar el derecho a la identidad de género, esto es, la subjetividad más íntima y profunda de la persona para elegir una identidad que no necesariamente coincide con su anatomía. Y me parece que el aspecto que habría que resaltar en el proyecto en consideración, tal como nos dice Rodotà, el sabio filósofo italiano del derecho, es que es mucho mejor una ley que sea dúctil a una que sea cruel.

En este caso, para hacer la rectificación en el registro civil a fin de reconciliar la identidad psicológica e íntima con la que se va a presentar frente a la sociedad, no será necesaria una mutilación o mutación quirúrgica —no depende del sacrificio ni del dolor—, sino un trámite ante esa dependencia, para reconciliar —reitero— lo que se siente de manera íntima y psicológica.

De modo que la libertad personal que hoy se viene a consagrar se convierte en social cuando se actúa con los otros. Es ahí, en esa mirada ofensiva, burlona, denigrante, con la que se nombra a quienes se nos presentan como diferentes, donde configuramos sufrimiento. Lo más fácil sería traer al recinto todos los testimonios de dolor y de sufrimientos que se vienen escuchando no desde ahora, sino desde hace muchísimos años. Quizás lo más fácil sea reconocer la identidad, que la identificamos cuando se habla de la muerte porque cada uno de nosotros ha tenido cerca una situación de pérdida. Pero mucho más nos cuesta identificarnos con aquellos que se ven como diferentes. Y fácil es poner situaciones emocionales para reconocer que hay mucho sufrimiento.

Vale traer acá, de la misma manera que argumenté al tratarse la ley de matrimonio igualitario, que no es que se trata de una norma progresista porque deseamos parecernos a Suecia. Lejos se está todavía de ser una sociedad que, efectivamente, consagre derechos y que posea tal grado de igualdad como la sueca. Sin embargo, se puede progresar sobre nuestro oscuro pasado, porque se tiene aquí nomás el aliento del sufrimiento, el autoritarismo y la dictadura, en donde ser diferente implicaba poner en juego no sólo la libertad y la dignidad, sino también la misma vida.

Por eso, deliberadamente, he traído estos relatos de sufrimientos cuando se vive el cuerpo como prisión de sentimientos que se expresan de manera brutal y salvaje en las prisiones de verdad. Aquellas que tienen rejas y donde la comunidad de personas trans es la más vulnerable al maltrato, las vejaciones y las torturas.

No se trata solamente de saber que en nuestro país tortura es incompatible con democracia, sino entender que se dan situaciones cotidianas que dañan igualmente la dignidad humana, como puede ser no seguir con los tratamientos hormonales que hacían en libertad, que no puedan acceder a la escuela o al trabajo porque las autoridades de las prisiones argumentan que no pueden compartir el mismo espacio con otros hombres no homosexuales o la imposición de que se corten el pelo o se vistan de hombres.

Y si menciono de manera deliberada a la cárcel es porque en la irre realidad verdadera de una prisión, donde precisamente como castigo penal

se cancela la autonomía, debemos ver como en un espejo que a aquellos que vemos como diferentes se los aprisiona en una imposición jurídica y sin rejas, es decir, a través de la imposición del prejuicio y de la cultura.

Es por eso que la norma en consideración está asociada a la voluntad y a la libertad; a que sea la persona quien diga quién es y no la imposición de los estereotipos legales, de los tiempos tutelados, como dije antes, cuando desde el poder se nos decía cómo debíamos ser y parecer, desde los libros que podíamos leer a lo que se hacía en las alcobas.

La futura ley deberá echar raíces profundas, no tanto en la sociedad, sino en la humanidad misma de los individuos, ya que cuando se otorgan derechos a los que se ve como una minoría, en realidad nos concedemos derechos a nosotros mismos; y no como integrantes de una comunidad política o un partido político, sino como integrantes mismos de la humanidad.

Ya se ha mencionado ampliamente el avance que ha habido en términos legales. Nuestra misma Constitución, en sus artículos 19 y 75, inciso 22, nos ha subordinado a los tratados internacionales de derechos humanos que, por suerte, han colocado esta dinámica que reivindicamos como sociedad progresista al encadenar nuestra Carta Magna y nuestras leyes a aquellas sociedades que ya han hecho un camino de desarrollo y de debate. Eso nos permite avanzar más rápido.

De la misma forma como se utilizaron por primera vez los términos orientación sexual e identidad de género, estos conceptos fueron incluidos como una recomendación en documentos consensuados por treinta y tres países en la Organización de Estados Americanos, a fin de aplicar a su respecto la legislación de derechos humanos.

En diciembre de 2008, sesenta y seis países de todos los continentes apoyaron una declaración que enfatiza que toda persona tiene derecho al disfrute de los derechos humanos sin distinción de ningún tipo; y precisaron que el principio de no discriminación exige que los derechos humanos se apliquen igualmente a cada ser humano sin importar la orientación sexual y la identidad de género.

Todas estas resoluciones han hecho de la discriminación por identidad de género u orien-

tación sexual una prohibición en el derecho Internacional. De manera que a los argentinos no nos resta otra cosa que poder cumplir todos aquellos tratados a los que nos hemos encadenado.

Nos queda ahora construir lo más difícil. Si con esta norma se va a incluir, como ya existe en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo lo relativo al trabajo pedagógico y cultural. Es decir que los derechos humanos no queden restringidos a las organizaciones, que se salga a la calle, que se recorran las casas y que entren en los debates; que en lugar de mencionar tanto a personas, en el debate público y político, se hable de temas, situaciones y derechos. Si estos no son conquistados son letra muerta.

El presente proyecto, al igual que el atinente al matrimonio igualitario, ha sido conquistado por los grupos que se llaman minoritarios. Ha sido la militancia y la perseverancia de estos grupos los que han alcanzado estos logros. Así debieran hacer todos los ciudadanos: golpear las puertas de sus representantes para advertirles que no se están consagrando todos los derechos humanos.

Para no cometer injusticias, quisiera homenajear a todas estas comunidades en una sola: la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. Aquellos que trabajamos desde el inicio de la democratización para que, efectivamente, en nuestro país se garanticen derechos, se denuncien las violaciones y se construya una cultura auténtica de derechos humanos sabemos que se trata de una organización que siempre ha estado al lado de la denuncia y ha trabajado para que se consagren estos derechos.

Es una comunidad que tiene casi la misma edad que la democracia. Y por eso incluyo en ella a todas las otras organizaciones que han conquistado este derecho.

**Sr. Presidente.** — ¿Puede ir redondeando, por favor?

**Sra. Morandini.** — Sí, señor presidente.

No puedo dejar de decir que cuando los derechos no se conquistan son letra muerta en el papel; y en nuestro país todavía existen muchísimos derechos sin ser garantizados.

Es comprensible que desde la sociedad se nos critique o se nos pregunte si esto es prioritario, pero no podemos entrar en ese tipo de debates.

El hecho de que no se garanticen otros derechos, el hecho de que reconozcamos que estamos todavía muy lejos de que en nuestro país se hayan consagrado la igualdad y el derecho para todos no invalida ni es razón para postergar el tratamiento de una iniciativa que viene a garantizar el derecho de la persona a elegir quién es.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Rojkés de Alperovich.

**Sra. Rojkés de Alperovich.** – Señor presidente: estamos en la antesala de la restitución de derechos a ciudadanos, y esto es producto de un trabajo mancomunado desde diferentes ámbitos. Por lo tanto, quiero comenzar agradeciendo y reconociendo la militancia de la comunidad trans, especialmente la de mi provincia, a través de la Multisectorial por la Diversidad de Tucumán. Junto a mi equipo y a la organización Crisálida vengo desde hace muchos años estudiando la problemática de esta comunidad. En Tucumán, junto a la Red de Mujeres Solidarias, espacio que conduzco y que es copartícipe del Centro de Alfabetización Trans “Marlene Wayar”, hemos logrado muchísimos avances que me gustaría compartir a modo de mostrar lo federal que es esta batalla cultural.

Quiero destacar dos resoluciones de la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán referidas a la aplicación de normas de trato respetuoso en los servicios públicos de salud provincial. También una resolución de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, durante la gestión de Hugo Cabral, implementando una norma de trato para trans en sus dependencias. Y un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que resuelve que la identidad de las personas trans es un derecho protegido especialmente por acciones de amparo.

Señor presidente: lo que tienen en común las identidades y expresiones de género trans no es lo que comparten como características, sino el destino social final al que son sometidas. Este destino es la expulsión del hogar a temprana edad, el trabajo sexual en la adolescencia, el riesgo temprano y continuo del VIH/Sida y otras infecciones, la violencia, el hostigamiento, la persecución, la violencia y la tortura policial, los crímenes de odio por transfobia, y los malos tratos en oficinas públicas o dependencias de distinto tipo. Todo esto ocurre frente a nuestros ojos: la discriminación, la criminalización, la

estigmatización y la exclusión de los sistemas educativos y sanitarios del acceso a un trabajo y a una vivienda.

Con este proyecto de ley, estamos resguardando el valor de la seguridad jurídica, porque estamos contribuyendo a una identificación real sin alterar la titularidad de derechos y obligaciones, ya que se mantiene el apellido, la fecha, el lugar de nacimiento, número de documento y, por supuesto, la huella dactilar.

La principal causa de deserción escolar son la discriminación y el desarraigo; esto impacta en la búsqueda de horizontes laborales, y estas encuestas demuestran que cuanto menor es el nivel de formación logrado, mayor es la dependencia de la prostitución como fuente de ingresos.

La identidad de género fue reconocida en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos; y nuestro país, junto a 65 naciones, en 2008 hizo la presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de documentos contra la discriminación, la violencia y la violación de los derechos humanos, incluyendo la necesidad de remover todo tipo de obstáculos en materia de identidad de género.

Todas las personas tenemos una identidad que es fruto de una construcción individual, personal y cultural, la que debe estar reflejada en la identificación. En el caso de las personas trans, la identidad personal difiere de la identificación.

Este proyecto de ley contempla la presencia del Estado en el acceso a la salud, pero en lugar de reparar o lamentar, con este proyecto de ley estamos garantizando el acceso a los procedimientos de salud integral tanto de los tratamientos hormonales como quirúrgicos y, en todos los casos, con el consentimiento informado.

Quiero compartir un dato más interesante. Las leyes que restringen los derechos humanos de las personas con identidad trans datan en general de la dictadura militar que rigió el país desde 1966 a 1970. Estas normas establecían que la identidad y el nombre de las personas se fija en el momento del nacimiento y que no pueden cambiarse sin intervención judicial, estableciendo además que el Documento Nacional de Identidad es el único instrumento que acredita fehacientemente dicha identidad. Esta dictadura también criminalizó a los profesionales de la salud que realizaran intervenciones

quirúrgicas de cambio de sexo sin autorización judicial. Por ello, las personas trans, desde ese entonces y hasta ahora, dependen de la decisión de jueces y juezas para obtener reconocimiento.

Pero nosotros continuamos avanzando en la ampliación y en el reconocimiento de diversos derechos, como el de la intimidad, el de la autonomía de la voluntad, el de elegir el propio plan de vida y el nombre, el de la identidad sexual, el de igualdad, el de vivir en dignidad, el de la no discriminación, el del trabajo, el de ejercer en plenitud los derechos políticos y el de la salud integral. Estamos legislando conforme a las más modernas doctrinas que rigen en la materia.

**Sr. Presidente.** – ¿Puede ir redondeando, por favor?

**Sra. Rojkés de Alperovich.** – Me cuesta muchísimo redondear; voy a adelantar mi voto positivo sintiéndome honrada de vivir este momento de restitución de legítimos derechos a nuestros conciudadanos.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador López.

**Sr. López.** – Señor presidente: voy a tomar parte del tiempo que le corresponde a la Presidencia de mi bloque para poder redondear una idea que voy a sintetizar.

A todo cuanto se ha dicho, y en tren de construir el recorrido jurídico legal que sostiene este proyecto de ley que vamos a votar, agrego que la resistencia y la lucha de los colectivos por la diversidad sexual, juntamente con el apoyo –como siempre acontece– de sectores sociales solidarios, han traccionado una parte importante de la evolución de la democracia.

Esto lo señalo, entendiendo que durante los dominios de la democracia y al calor del movimiento de los derechos humanos, fundamentalmente desde mediados del siglo pasado en la posguerra, fueron emergiendo cada vez con más claridad –pero no simplemente como anexos, sino con la fuerza estructural constituyente no sólo del concepto de la persona, sino también de la democracia–, derechos como la dignidad, la igualdad de oportunidades –y la igualdad no solamente teórica, sino también la real–, la prohibición de la discriminación, la intimidad –tal como bien ha sido mencionado y reconocido en una de las cláusulas más sabias de nuestra Constitución ya desde el siglo XIX, como es

precisamente el artículo 19– y la síntesis de todos estos derechos, que es la identidad.

Transito este mismo recorrido de derechos expresados en nuestra Constitución Nacional, a través de los tratados internacionales sobre derechos humanos que la integran, y digo que sin autonomía de conciencia no hay identidad personal, sin derecho a elegir el perfil de la propia identidad no hay dignidad humana; y no hay democracia sin dignidad humana.

Nuestro país ha hecho un aporte importante a la construcción del derecho a la identidad, bien que en otro ámbito, pero con el mismo derecho, a través de lo que fue la lucha de Abuelas por la recuperación de la identidad de los hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio y apropiados ilegítimamente por la dictadura.

Desde allí se ha nutrido no sólo en el ámbito político y social, sino también doctrinario y jurisprudencial, a la construcción del concepto de la identidad.

Estamos convencidos de que sin posibilidades fuertes y reales de que cada ciudadano de nuestra Nación tenga correcta y plenamente definida su identidad, menos chance tenemos como país de construir nuestra identidad colectiva como Nación. La identidad individual es un insumo, un componente, un ingrediente de la identidad colectiva.

En síntesis, una verdad que puede parecer de perogrullo, pero no por eso menos importante: el sol sale para todos. Por eso creo que esta iniciativa les va a permitir a muchos rostros tomar luz, salir de la oscuridad, aparecer. En definitiva, a partir de mañana, nada menos que un grupo numeroso de personas de nuestro país va a liberarse de una cárcel o de una carga importante, de la mochila de la existencia misma, de poder andar por la calle con la frente alta, poder exigir y hacerse respetar con convicción y con orgullo en su identidad y poder con esto defenderse de situaciones en las cuales muchas personas fueron obligadas a desaparecer por la discriminación.

En definitiva, crear o permitir espacios de mayor libertad y felicidad para más gente, sin necesidad de que esto sea quitado a otros sectores es un signo de la época que transitamos como país y de fortalecimiento de nuestra democracia.

Por esa razón, vamos a votar positivamente, con el orgullo de poder decirlo desde la pertenencia de uno al colectivo por la diversidad sexual, homenajearlo, por supuesto, a las organizaciones que han militado por este tema y que han hecho posible que hoy estemos dando este paso.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Godoy.

**Sr. Godoy.** – Señor presidente: seré muy breve.

Es una satisfacción poder estar participando en esta sesión, poder estar abordando este proyecto que tiene sanción de la Cámara de Diputados. La paradoja es que lo pude votar en la última sesión de la Cámara de Diputados, y hoy lo votaré acá en forma afirmativa en el Senado. Por eso la satisfacción.

Hace pocos días estuvimos en San Juan con todas las organizaciones que integran esta comunidad, y la verdad es que estos temas son más usuales y fáciles de debatir y discutir en los centros urbanos. Esto resulta difícil y complejo en el interior de nuestra Argentina. Pero por la militancia, por el esfuerzo que han hecho todas las organizaciones, encontramos que nuestras sociedades en el interior se van abriendo, y estos temas hoy también se pueden discutir.

Comparto todo lo que se ha dicho acá; los padecimientos que tiene este sector, que ha sido estigmatizado, perseguido y humillado. En definitiva, muchos fueron condenados a la prostitución, porque no tenían otra fuente de trabajo, otra manera de acceder a un empleo digno y por eso han sido discriminados y marginados. Generalmente se ha acentuado esta marginación por su pertenencia a sectores vulnerables de la sociedad.

Nos decían en una reunión: “Nos sentimos como muertos civiles, porque se nos ha menoscabado en nuestros derechos, sin posibilidad de trabajo digno, de la educación, de la salud y con consecuencias nefastas que se ven a partir de una muy mala calidad de vida y con una tasa alta de mortalidad”.

Tal como se señalaba recién, este sector tiene una expectativa de vida que no pasa los treinta y cinco o treinta y seis años. Es decir, nosotros estamos acá consagrando un derecho a la identidad que es un derecho fundamental para las

personas, que les permite ser como quieren ser y tratadas, reconocidas y protegidas por el Estado, tal como son. Y si bien este Estado es el que los debe proteger, el que les debe garantizar los derechos, son las propias personas quienes deben definir su proyecto de vida. Ahí el Estado no tiene que intervenir en la definición que tiene cada persona.

Me parece que estamos en un tiempo donde ampliamos, reparamos y restituimos derechos. Considero que el matrimonio igualitario fue un punto de inflexión para que estos temas se pudieran discutir y ha sido, en definitiva, una guía que ha tenido este gobierno a partir de 2003 de poder incluir a muchos sectores de la sociedad que están excluidos; 5 millones de nuevos puestos de trabajo; jóvenes que se incorporan al empleo; asignación universal por hijo; jubilados y pensionados que se incluyeron al sistema previsional; y el matrimonio igualitario, que hoy tiene los mismos derechos.

Así, a este sector postergado, humillado, hoy le restituimos los derechos. Me parece que este es el propósito que tiene esta norma, es decir, el de poder consagrar estos derechos y seguir avanzando para que cada vez tengamos una sociedad más democrática, más plural y más tolerante.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Romero.

**Sr. Romero.** – Gracias, señor presidente.

Voy a tratar de correr, así como lo hizo mi colega por San Juan (*risas*), para poder expresarme en poco tiempo.

Quiero aclarar que no fui influenciado por ningún *lobby*; y no es que lo haya rechazado, sino que no tuve la oportunidad, pero sí me convenció una salteña, a través de un medio de comunicación escrito, que en su relato periodístico en una entrevista me hizo advertir muchas cosas.

Más allá del tema del derecho, de todos los otros legítimos reclamos, estaba la cuestión de que la comunidad trans en la Argentina –y ahí también aprendí el nombre en el diario– es un grupo que sufre la discriminación. Y eso me hizo pensar en ese momento y decidir, llegado el tiempo de tratarse este proyecto aquí, que lo iba a apoyar.

Esto no tiene para mí connotación ni nada que ver con la ley del matrimonio igualitario, porque todavía aquello es más simple. ¡Cuántas chicas y chicos, incluso de familias conocidas por nosotros, deciden convivir sin casarse y nadie se asusta; nadie los discrimina por eso! O en otros países donde directamente deciden los hombres y las mujeres no casarse, y no son discriminados. Pero esto es más grave que la no existencia del llamado matrimonio igualitario. Porque aquí hay una efectiva discriminación, los viejos edictos policiales en las provincias perseguían —esto se fue modificando— a la prostitución, lo que significaba el abuso policial, la violencia, el rechazo, el instituto educativo.

Como dijo el amigo Godoy, en el interior están la mofa, la chanza, la falta de respeto; es una situación gravísima para estas personas de carne y hueso. No estamos hablando de colectivo, de ideas. Estamos hablando de vecinas, vecinos, comprovincianos víctimas de esta situación de discriminación social, educativa, la violencia, el acoso y, sobre todo, la prostitución, pero no como una opción de la persona, sino como una obligación. El no tener acceso a la educación, a un trabajo; el no ser requeridos, incluso pudiendo tener la aptitud para hacerlo; el solo hecho de que su aspecto no coincida con el nombre del documento es una causal para que no sea tomado en un trabajo.

Considero que la importancia no está aquí. No estamos legitimando la prostitución; al contrario, desde mi punto de vista lo que estamos haciendo aquí es un esfuerzo legislativo de reconocimiento a una realidad que haga que la prostitución no sea la única opción que tenga este grupo de personas.

Y creo que eso es lo más importante de esta iniciativa, es decir, la importancia que tiene que nuestra sociedad aprenda (pero no por la imposición, por el mérito del gobierno ni por alguna actitud violenta, sino a través del diálogo, de asumir la realidad de los tiempos) a convivir con respeto y tolerancia con las personas que piensan o actúan distinto a cada uno de nosotros.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el senador González.

**Sr. González.** — Señor presidente: para ser breve, fundo mi voto positivo compartiendo argumentos con la senadora por la provincia de Santa Cruz, María Ester Labado.

Este proyecto de ley no es un otorgamiento de derechos, sino que en definitiva da operatividad a artículos que ya estaban consagrados en la Constitución, concretamente los artículos 16, 19 y 33, así como también el artículo 75, inciso 19, que claramente impone a este Congreso el dictado de leyes que aseguren la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna.

Destaco los principios de Yogyakarta, que ya fueron señalados por el senador Fernández. En realidad, la definición de identidad de género, que está en el artículo 2º de la iniciativa, es la misma que se estableció en ese acuerdo que firmó nuestro país. De la misma forma, en 2008 —lo dijo la senadora Rojkés de Alperovich— nuestro Estado también consagró este derecho junto con otros 65 países. Concretamente, en esa declaración se dice que toda persona tiene derecho al disfrute de los derechos humanos sin distinción de ningún tipo, que el principio de no discriminación nos exige que los derechos humanos se apliquen igualmente a cada ser humano sin importar la orientación sexual y la identidad de género.

En consecuencia, es muy importante señalar que actualmente la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio son conductas dirigidas en contra de personas en todo el mundo debido a su orientación sexual o su identidad de género.

En definitiva, este proyecto de ley es una continuidad de la política del gobierno nacional en materia de derechos humanos como inclusión social. A su vez, como también aquí se ha dicho, se anota allí la ley de matrimonio igualitario además de la de salud mental —como señaló la senadora Escudero—, sancionada por este Congreso, que dice claramente que en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de la elección o la identidad sexual.

De esta manera fundo mi voto positivo. Es una satisfacción enorme poder votar hoy esta norma que, insisto, hace operativo derechos que ya estaban consagrados en nuestra Constitución.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.

**Sr. Cabanchik.** — Señor presidente: manifiesto nuestro acuerdo para acompañar esta

iniciativa por lo que significa de progreso para todo un sector de la sociedad.

Dado el breve tiempo que tengo para exponer, diré que el concepto es muy importante, porque trata de ajustar lo interno en relación con la apariencia, y que todo ello pueda ser expresado en la identidad civil, y al mismo tiempo, genera la posibilidad de que haya asistencia médica cuando se lo requiera y sea cubierta por obra social o empresa de medicina prepaga.

De todas maneras, quiero dejar asentado que acá va a ser necesaria mucha nueva legislación que se amolde a esta que se está por sancionar, porque la distinción femenino-masculino u hombre-mujer permea un montón de cuestiones del régimen legal argentino; desde la distinción entre nombres de hombres y nombres de mujeres; la cuestión de las cárceles de hombres y las cárceles de mujeres; los agravantes acerca del femicidio, asunto sobre el que estamos trabajando; la cuestión del cupo femenino para las cámaras de diputados y de senadores. O sea, hay un montón de consecuencias que se deberán tener en cuenta al dar este paso que estaríamos efectuando hoy, porque están unidas en una lógica sistémica de la legislación, que tiene que ver con prácticamente la regulación completa de la vida en sociedad.

Simplemente quiero advertir que habrá que realizar muchos ajustes en todos estos niveles que acabo de mencionar rápidamente. Más allá del acuerdo general con el proyecto, considero que estos puntos debieran ser respondidos de alguna manera. Ojalá alguien ya los tenga respondidos y pueda manifestarlo en lo que queda de la sesión.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Martínez.

**Sr. Martínez.** – Señor presidente: voy a comenzar leyendo el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que dice en su primera parte que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.

Hoy es el segundo proyecto de ley que tratamos que tiene que ver con esto de la autonomía, de la autodeterminación que tiene cada una de las personas.

Cuando se habla de minorías o mayorías, tal disquisición no existe cuando se tiene que legislar en función de derechos. No interesa si los derechos son para minorías o para las mayorías; son derechos que tienen que consagrarse.

Incluso teníamos una pequeña diferencia respecto del artículo 11 del proyecto, donde se habla de la incorporación en el PMO de determinado tipo de prácticas. Pero me terminó de convencer la senadora Escudero de que es saludable hacer una discriminación positiva respecto de aquellos que han sufrido tanta discriminación durante mucho tiempo. Por eso vamos a acompañar tanto en general como en particular esta iniciativa.

Aquí en el Senado tuvimos la visita de un grupo más que interesante de estudiantes de la Universidad del Litoral, que trabajaron en un proyecto antidiscriminatorio. Lograron que en esta universidad se determinara con mucha claridad el respeto a la identidad de género. Luego esta iniciativa fue llevada adelante por la Universidad de Córdoba, al igual que facultades de la UBA y de la Universidad de La Plata. Pero al tener que otorgar un título, se veían con el impedimento de respetar la identidad de género que había manifestado una persona. Por eso este es un paso más que importante.

Considero que hoy estamos de un modo salvando algunas de las tantas deudas que tiene este Congreso, que en definitiva son deudas de la sociedad. Como bien decía el senador Fernández, quizá no se hizo antes porque no estaban las posibilidades. Lo más importante es aquello que han conseguido a través de la militancia las distintas organizaciones y personas.

Debo reconocer, por ejemplo, que en mi provincia –Santa Cruz– hace no demasiado tiempo atrás éste era prácticamente un tema tabú y hoy es un asunto que se puede debatir y discutir gracias a que ha sido visibilizado a través de la participación y el reclamo de la gente.

Por todas estas razones, y para no extenderme, señalo que el respeto a la identidad de género se basa en el derecho humano fundamental de decidir quién se es y a tener condiciones dignas de vida y elegir cuál es el proyecto que uno quiere llevar adelante.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la senadora Corregido.

**Sra. Corregido.** – Señor presidente: hoy hemos estado el día entero hablando de las cuestiones de la existencia, los problemas de la existencia, de la vida y la muerte.

Hace muy poco tiempo, en la provincia del Chaco, Úrsula Sabarece tuvo la satisfacción de que la jueza doctora Laura Varela, en un fallo, le permitiera la reasignación de su identidad, reconociendo que es un problema existencial que el derecho no puede soslayar y que la petición de Úrsula se enmarca en el ejercicio de la autonomía de su voluntad, y que corresponde el reconocimiento a su honra y su dignidad. Úrsula es una mujer encantadora que, como todas las personas trans, ha padecido todas las discriminaciones y los dolores que la vida, la sociedad y nosotros le hemos puesto en su camino.

Hoy, con esta iniciativa, estas historias, estos recursos, estos amparos se terminan y empezamos a darle a la sociedad este claro derecho. Pero que no significa solamente el reconocimiento del derecho; no es cuestión de decir: “Bueno, que se llamen como quieran”, sino que se trata también de integrar, que, desde la política, desde el Estado, les garanticemos a esas personas el acceso al goce de todos los derechos: a la educación, a la salud y a vivir felices y plenos como cualquiera de todos nosotros.

Quisiera hacer un reconocimiento no solamente a las organizaciones sociales que vienen militando por este derecho a la igualdad sino también a Néstor Kirchner, quien en 2004 le hizo saber al Vaticano, por intermedio de Rafael Bielsa, quien era su canciller, que la Argentina iba a apoyar la resolución de las Naciones Unidas de no discriminar por orientación sexual o por identidad de género, y le pidió a todas las instituciones que militan por estos derechos que lo hagan saber adentro y afuera del país.

En consecuencia, no quería dejar de recordar a Néstor, a las organizaciones, a Claudia Pía Baudracco –quien murió sin poder registrar su verdadero nombre–, como a tantas y a tantos que luchan cada día por un país mejor.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.

**Sra. Di Perna.** – Señor presidente: quiero decir que, en principio, coincido con mucho de lo expresado en esta noche respecto de las libertades individuales y que repudio fuertemente todo

tipo de discriminación. Sin embargo, considero que, de aprobarse este proyecto de ley tal como ha sido sancionado por la Cámara de Diputados, se van a estar generando más problemas que soluciones para la sociedad argentina.

En primer lugar, este proyecto propone la adulteración de un documento público, como es la partida de nacimiento. Sabemos que este no es el único documento que acredita el sexo y la identidad en un recién nacido. También lo hacen la historia clínica perinatal, la planilla identificatoria del recién nacido, la libreta sanitaria y los libros de parto, que se llevan en maternidades y hospitales. Los datos de estos registros los aportan profesionales que tienen también una responsabilidad penal ante los mismos y deben ser coincidentes con los datos de la partida de nacimiento. Debemos recordar que este tipo de registros ha sido solicitado por la Justicia para esclarecer casos de niños apropiados. Por ello, considero que una ley no debe permitir esta adulteración de documentos.

Por otro lado, si hablamos de las características sexuales secundarias, no sólo tienen importancia identificatoria en un recién nacido, sino que también pueden ayudar al diagnóstico diferencial de distintas enfermedades ligadas al sexo –como, por ejemplo, la hemofilia–, que seguirán existiendo por más que se modifiquen los caracteres externos.

Señor presidente: considero que se puede contar con un documento que acredite la correcta identidad de género autopercibida, que debe ser un trámite administrativo ágil, pero que no se puede adulterar la partida de nacimiento. Esto es un delito.

Es posible modificar los caracteres sexuales secundarios. Es posible inhibir la función de los órganos sexuales primarios mediante tratamientos hormonales. Pero no se puede alterar el genotipo de sexo de un individuo presente desde la concepción, en el núcleo de cada célula del organismo.

Otro de los problemas en los que peca de omisión este proyecto es la financiación. Se dice que las personas que padecen este conflicto entre sexo y percepción de género no son enfermos, pero sin embargo se cargan sobre el sistema sanitario tratamientos quirúrgicos y hormonales con los mismos recursos.

Señor presidente: durante seis años fui ministra de salud de mi provincia. En ese tiempo, asistí mensual o bimestralmente a reuniones con los ministros de la Nación y de todas las provincias argentinas. Debatimos temas sanitarios y analizamos cómo, a medida que avanzan la medicina y la tecnología, aumentan los costos sanitarios, mientras que los recursos siempre son escasos.

Un modo de financiación sostenible para la salud es una deuda pendiente en nuestro país. No debiera ser posible obligar al sistema a brindar prestaciones extras con iguales recursos, y, menos aún, si se tiene en cuenta que, en este caso, puede haber una demanda retenida que va a requerir rápida atención si se aprueba este proyecto de ley.

El tercer problema, tal vez el más grave, es el que se plantea respecto de niños y adolescentes, dado que considero que se vulnera la protección a la infancia. El Estado debe proteger a los menores de edad. Ellos son inimputables para la ley por su condición de persona en crecimiento y en desarrollo.

Quiero destacar que la infancia debe tener un derecho a protección especial en nuestro país. Los niños siguen sufriendo innumerables formas de violencia, como el castigo corporal, el abuso sexual y el trabajo infantil. Esto exige el fortalecimiento de redes intersectoriales y la implementación práctica de medidas de protección integral.

Cuando miramos hacia dentro en nuestro país, vemos que aún hay inequidades en los derechos de salud y educación. Creo que estos derechos y el de protección especial de la infancia deben ser prioritarios y no abrir nuevos frentes que faciliten vulnerarlos.

Por estos fundamentos, y porque considero que este proyecto de ley tiene grandes falencias, voy a solicitar abstenerme en la votación.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Luna.

**Sra. Luna.** – Señor presidente: el 8 de marzo pasado, en oportunidad de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, concurrí a una invitación en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y conocí a una mujer que se me acercó y nos pidió que los senadores comenzáramos a recibir una ronda de reuniones en función

de este proyecto de ley, que ya tenía sanción de la Cámara de Diputados. El nombre de esa mujer es Claudia Pía Baudracco, quien, diez días después del Día Internacional de la Mujer, murió. A esa misma mujer le fue rechazada, en dos oportunidades, su presentación ante la Justicia –un amparo– por el cambio de identidad.

Señor presidente: a fuerza de ser reiterativa, es mi obligación, además, recordar que nuestro gobierno, a partir de 2003, primero con Néstor Kirchner y luego a través de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ha afianzado una política integral en materia de derechos humanos, en función de la cual se impulsaron y se fortalecieron en muchos casos políticas concretas, como la conformación de una Corte independiente, la sanción de una ley de medios de comunicación audiovisual, la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y la sanción de la ley del matrimonio igualitario, por mencionar sólo algunas. Dichas iniciativas representan, nada más ni nada menos, las demandas sociales de distintos sectores por la plena vigencia y la ampliación de los derechos.

Pero también es cierto que, a casi treinta años de la restauración de la democracia en la Argentina, todavía no se reconoce, o en la mayoría de los casos se limita, el acceso a los derechos humanos consagrados por la Constitución Nacional a las personas trans. Nos referimos a los ciudadanos y a las ciudadanas trans, que al no contar con un reconocimiento legal de sus identidades quedan librados a situaciones de vulnerabilidad y exclusión, especialmente en los ámbitos laborales, educativos y de salud, como así también a situaciones de violencia institucional, social y cultural.

En nuestro país, la inmensa mayoría de las personas trans no ha podido cambiar su estatus legal, social y físico para que concuerden con su identidad y su expresión de género. Es más, recién desde hace menos de diez años se inicia un proceso de derogación de las figuras que criminalizan el travestismo en los códigos de faltas y contravencionales, algunos de los cuales todavía continúan vigentes en algunas provincias, como la mía, en donde sigue vigente el código de la dictadura, que, obviamente, cae con mayor crueldad en jóvenes sin recursos económicos a través de figuras que criminalizan la identidad

y la expresión de género y sus estrategias de subsistencia.

Ser travesti, transexual o transgénero en la Argentina y, especialmente, en el interior del país implica las más de las veces estar condenado o condenada a diversas prácticas de persecución sistemática, represión, discriminación y exclusión, instrumentadas de manera directa a través de códigos de contravención y complementadas indirectamente con un gran dispositivo de exclusión, marginación, discriminación social y cultural, representado por los prejuicios sociales y el desarraigo familiar, que provoca esta discriminación y la sistemática expulsión del sistema educativo y de los circuitos laborales.

Asimismo, me referiré al artículo 11, que me parece muy importante porque a través de este proyecto también estamos denunciando la vigencia de una ley de la dictadura, la 17.132, del dictador Onganía, que regula el ejercicio profesional de la medicina y prohíbe los tratamientos hormonales y la realización de intervenciones quirúrgicas para la modificación del sexo.

Vaya mi agradecimiento a todas las organizaciones que en estos años dieron muestras de perseverancia y produjeron cambios significativos a través del aporte de conceptos, experiencias y marcos jurídicos; de la construcción de políticas sociales y comunitarias; y de la generación de antecedentes muy importantes en la Justicia y de teorías y de saberes que nos enriquecen como sociedad. Pero esto es sólo el comienzo. Como dijeron muchos senadores, el paso definitivo debe darse cada día, a través de la construcción por parte de cada argentino y cada argentina de mayor tolerancia y respeto a la diversidad.

Para finalizar: por Daiana, quien murió ayer en La Rioja –vaya nuestro reconocimiento, pues fue la primera mujer que consiguió su derecho a la identidad de género–, y por Pía, quien lamentablemente –con todo dolor– se fue sin tener ese derecho elemental, no permitamos que nunca más un argentino o una argentina muera sin su derecho básico a la identidad.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Sanz.

**Sr. Sanz.** – Señor presidente: como ex alumno de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral, siento

un gran orgullo por el proyecto “Diversidad sexual y derechos humanos, desafíos y estrategias de inclusión ciudadana”, elaborado por la mencionada facultad. Ése fue el proyecto que estableció en todo el país un espacio progresista y de vanguardia en relación con esta cuestión y ayudó a que hoy nosotros estemos considerando esta iniciativa.

Por último, felicito al rector de la universidad, el doctor Albor Cantard, y a la directora del proyecto, la doctora Claudia Levin.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Riofrio.

**Sra. Riofrio.** – Señor presidente: en horas previas a esta sesión, releando algunos artículos periodísticos, me encontré con uno que recordaba el caso de Mariela Muñoz, una travesti que había cuidado a varios chiquitos abandonados y pretendía cuidar a dos nenas. El tratamiento mediático que se le dio fue atroz, la Justicia retiró e institucionalizó a las dos pequeñas, y, por supuesto, todos quedaron muy tranquilos. Me arriesgo a pensar que hoy, aun sin este proyecto que estamos tratando, ningún juez de la República se animaría a negar derechos por una cuestión de identidad de género, y mucho menos que una resolución judicial de ese tipo tendría el consenso social que tuvo en aquella oportunidad.

Pasaron poco menos de dos décadas. La sociedad argentina está hoy encaminada a una construcción social en la que se incorporan categorías, conceptos y modelos, y se amplían derechos. Esta construcción se realiza sobre la base del irrestricto respeto de los derechos humanos, eje de una política de Estado inaugurada por Néstor Kirchner y sostenida y ampliada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque los tiempos y las sociedades cambian, naturalmente que van cambiando. Pero cambian mucho más rápido y sin tanto dolor con construcciones políticas que prioricen el ejercicio de las libertades y de la igualdad.

Subsanar siglos de marginalidad, violencia, exclusión y discriminación sistemática no es tarea sencilla; demanda promover nuevos dispositivos o acciones afirmativas que permitan la incorporación de todos los que fueron quedando a los márgenes del sistema. El proyecto que estamos considerando es, sin dudas, uno de esos instrumentos. Es superador, inclusive,

al de los casi cuarenta países en el mundo que tienen legislación al respecto. Ciertamente, es hora de votar con la valentía de la memoria, recordando a los responsables de la construcción de la discriminación y de la violencia. Ése es el verdadero reto al statu quo imperante.

Estamos dando paso a una sociedad plural en la que cada vez sean menos los que simplemente toleren como se tolera la enfermedad o la basura de la ciudad, es decir, con resignación, y muchos más los que acepten la dignidad humana de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

**Sra. Morandini.** – Señor presidente: pido la palabra para efectuar una aclaración.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.

**Sra. Morandini.** – Señor presidente: para no extenderme más tiempo, no traje el ejemplo de Mariela Muñoz. Pero debo decir que en esa época yo era periodista y contrarié al statu quo –como se dice ahora–, pues entrevisté a Mariela y traté con enorme respeto su caso. Lo que me sorprendió en esa oportunidad, hace más de quince años, fue el total reconocimiento de parte de la sociedad –si uno la reduce a los llamados telefónicos que se hacen en un programa de televisión– a aquella mujer que había cuidado y educado a esos chicos y que era mucho más madre que la que había abandonado a sus hijos.

Por lo tanto, me parece importante que no se haga esa generalización en cuanto a los tratamientos mediáticos, pues muchos periodistas trabajan con responsabilidad.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Morales.

**Sr. Morales.** – Señor presidente: en primer lugar, solicito autorización para insertar.

Creo que se han dicho muchas cosas importantes que resaltan que el Congreso de la Nación forma parte de la batalla cultural que se está dando, en la que no existen las banderías políticas. En ese sentido, considero que debe reivindicarse el desafío cultural que están llevando a cabo los legisladores de cara a la sociedad desde hace bastante tiempo: la recuperación y concreción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de las leyes que sancionamos; la lucha por los derechos de la mujer; la lucha por los derechos de las comunidades

originarias; el tema del matrimonio igualitario, que creo que ha sido el más difícil, pero fue resuelto satisfactoriamente por una gran mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores; el tema de la muerte digna, que acabamos de tratar y, ahora, la cuestión de la identidad de género.

Todas esas iniciativas forman parte de una matriz del cambio cultural –por el que tenemos que felicitarnos como hombres y mujeres de la política– que estamos dando de cara a la sociedad y que no tiene que ver con la concepción de la mayoría. Si fuera por eso, posiblemente tendríamos mayores impedimentos para resolver estas cuestiones relacionadas con los derechos de las mayorías y de las minorías. Este debate tiene que ver con los desafíos por la justicia y la igualdad, con la lucha contra la intolerancia y la discriminación, con los desafíos por una sociedad inclusiva con garantías y derechos para todos y todas, ya sean mayoría o minoría. Estamos frente al desafío de resolver una cuestión tan importante en materia de derechos como es la de la identidad, a efectos de que las personas puedan contar con un plan de vida acorde con su identidad de género y que respete la dignidad de las personas.

Vilma Ibarra, que ha sido miembro informante en la Cámara de Diputados, ha planteado dos temas –o una conceptualización– que hay que tener en claro para saber frente a qué estamos: la diferencia entre sexo y género, entendiendo por sexo la asignación que reciben las personas al nacer, que reconoce diferencias biológicas primarias que caracterizan a un hombre o a una mujer. Y entendiendo como género un concepto mucho más abarcativo, que es la percepción que cada persona va teniendo de sí misma, desde pequeña, a lo largo de la vida, abarcando el sentir más profundo de la persona, expresándose en la forma de vestir, de comportarse y en los modales. Obviamente, el proyecto abarca la cuestión del nombre, la identidad y también la cuestión de la salud.

Me parece que con el debate de los derechos de niños, niñas y adolescentes y el tema del debate en los derechos de la mujer terminamos de romper con estas cuestiones. Porque hoy, el nombre se puede modificar a través de una acción judicial, y la Justicia termina metiendo al Estado en la intervención, con cuestiones

de pericias y algunos aspectos que terminan invadiendo la intimidad y los derechos personalísimos. Creo que siempre detrás de estas concepciones que restringen derechos está un viejo concepto tutelar que termina convirtiendo a niños, mujeres y a sectores minoritarios de la sociedad en objeto de derecho.

La senadora Escudero ha planteado acá algunas estadísticas que refuerzan el porqué tenemos que contar con una ley cuya aprobación va a terminar convirtiendo a la comunidad trans y al conjunto de la sociedad en sujeto de derecho. Considero que éstos son los desafíos; la cuestión de la identidad, el tema del nombre, el tema del derecho a la salud.

Por último, con relación a la cuestión de la salud –y si hay algunos temas que no están incluidos en el PMO–, me parece que habrá que trabajar por otra vía para lograr su inclusión. Esta ley está redondita, cierra la cuestión de derechos de la identidad, y también está muy bien que aborde la cuestión de la obligación de que el sistema de salud tenga las previsiones que la ley expresa.

Dicho esto, y reiterando que vamos a insertar algunos otros conceptos, obviamente apoyaremos la iniciativa.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la senadora Corradi de Beltrán.

**Sra. Corradi de Beltrán.** – Señor presidente: nuevamente hoy el Congreso está dando tratamiento a un proyecto que, sin lugar a dudas, va a contribuir a una nueva conquista o reivindicación de derechos de personas que hace mucho tiempo están detrás de esta lucha. Personas que están esperando poder tener el nombre y un DNI que las identifique y que se ajuste a su identidad de género. Personas que han dado muchísimos testimonios de situaciones que han tenido que padecer porque se sienten de una manera diferente al sexo con que les ha tocado al nacer.

Según los principios internacionales de derechos humanos, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente profundamente, el cual podría o no corresponder con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Lamentablemente, muchas de estas personas han sido víctimas de situaciones o de abusos durante toda su vida, por padecer o

por carecer del derecho que, si bien les asiste, estaba siendo vulnerado. Personas procesadas por ser consideradas un peligro para la sociedad; algunas que han perdido la custodia de sus hijos o hijas por su comportamiento diferente al sexo que poseían; violencia por parte de la policía; agresiones y homicidios en las calles; insultos frecuentes; acoso escolar; negación del empleo, domicilio o servicios de salud; incitación al suicidio.

En esta oportunidad que tenemos en el Senado de la Nación de avanzar en la sanción de esta ley, tenemos que agradecer profundamente a las organizaciones que han venido trabajando en este sentido; al INADI y a otros funcionarios que han venido sosteniendo y acompañando este proyecto que hoy estamos a punto de aprobar. Digo esto porque, realmente, gracias a las audiencias públicas que hemos tenido, a la posibilidad de acceder a información, a conocer expresiones testimoniales de quienes hoy están siendo protagonistas, a través de esta legislación, no he podido hacer otra cosa que conmoverme.

Creo que, para poder avanzar, conocer y sentir la convicción de que hay que cambiar y asegurar o garantizar los derechos de las personas, tenemos que colocarnos en la situación de estas personas que hoy ven vulnerados sus derechos y leer expresiones o testimonios de vida de estas personas. Como, por ejemplo, en algún caso, leí que una de ellas expresaba: “Las personas trans sufrimos la discriminación por nuestra identidad de género casi desde que tenemos uso de la razón”. Otra persona decía: “Somos rechazados por nuestra propia familia. El sistema educativo nos expulsa por ser diferentes, y a las que terminamos la secundaria, nos cansa buscar y buscar trabajo sin lograrlo”. Expresaba otra persona: “Para las trans, la democracia aún no llegó”.

Hablar de género no es un tema de órganos sexuales. Es cuestión de identidad. Hay una expresión de una amiga que es protagonista de esta historia, de esta parte de la sociedad que ha estado marginada, olvidada o también discriminada, que decía sentir que había nacido en el cuerpo equivocado. Creo que todas estas expresiones o testimonios de vida nos sirven para tener realmente la convicción y el com-

promiso de seguir avanzando con la sanción de estas leyes.

Una vez más, como lo hemos hecho con el matrimonio igualitario y como en varias sanciones de leyes que han mencionado aquí otros senadores, hoy nosotros tenemos la posibilidad de avanzar también con esto. Señor presidente: estamos siendo protagonistas, por gracia de Dios, de la transformación cultural de la República Argentina. Una vez más, acompañamos un proyecto que va en la defensa y en la garantía de los derechos humanos. “Va a salir el sol para todos”, como decía aquí el senador López. Tiene que ser así. Nosotros vamos en ese camino y realmente somos bendecidos de ser protagonistas de este cambio.

Muchísimas gracias a quienes han trabajado en este proyecto, a quienes nos dan la posibilidad de conocer cómo sienten y quiénes son los argentinos que todavía tienen sus derechos vulnerados o no garantizados. Creo que a muchos de nosotros se nos ha abierto la cabeza, nos han enseñado y hoy estamos procediendo en consecuencia.

Nada más, señor presidente. Muchísimas gracias. Adelanto mi voto afirmativo a este proyecto de ley.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Fuentes.

**Sr. Fuentes.** – Señor presidente: damos un paso sumamente importante en lo que es la edificación de un basamento mínimo que hace a la igualdad, a la lucha contra la intolerancia y la discriminación. Pero este paso, que es simplemente eliminar restricciones de orden legal, no garantiza, precisamente, ni que esa discriminación ni esa desigualdad desaparezcan por arte de magia. La igualdad y la ausencia de discriminación es una construcción colectiva, una construcción de la totalidad de la Nación y de sus integrantes.

He visto con suma preocupación dos episodios. El primero, con motivo de la asunción al poder del Partido Popular, en España, la promesa del primer ministro Rajoy de rever los avances en materia de legislación igualitaria, como consecuencia de la presión de la Iglesia Católica en España. El segundo, hace pocos días, la reunión de un plenario de obispos donde ya mencionan –con delicadeza y gentileza– ad-

vertencias en torno a la facultad de reformar la legislación civil argentina.

¿Qué quiero significar con esto? Que les cabe a las instituciones religiosas la responsabilidad de colaborar en el barrer las discriminaciones reales existentes en la Argentina. Vivimos las presiones con motivo de la discusión del matrimonio igualitario; presiones de obispos, presiones de púlpito. El síndrome del púlpito. La extorsión de la religión. Por lo tanto, la importancia del día de hoy radica en que estamos con 2.000 años de atraso cimentando la secularidad del derecho. El derecho es una construcción autónoma; no son la religión ni los dioses los que deben determinarlo.

Mi intervención era simplemente para manifestar esta preocupación. No va a haber construcción igualitaria en la Argentina y no va a haber construcción de derecho pleno en la Argentina si los responsables de apacentar los rebaños –como dicen– o si los responsables de llevarles tranquilidad a sus fieles no los preparan para un mundo de cambios. El mundo marcha hacia los cambios. O lo entendemos o somos los responsables de las consecuencias que eso tenga.

Nada más, señor presidente.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

**Sr. Giustiniani.** – Voy a compartir el tiempo con el senador por Córdoba, Luis Juez, y él será quien empiece.

**Sr. Presidente.** – Entonces, tiene la palabra el senador Juez.

**Sr. Juez.** – Voy a hablar solamente un minuto, porque no quiero quedarme afuera de la versión taquigráfica.

Quiero decir que recuerdo la noche del 15 de julio, cuando voté muy contrariado. Estábamos a menos de un mes de la elección en mi provincia –provincia conservadora como ninguna– y en el medio de una presión terrible. Estábamos consagrando una violación increíble a creencias en las cuales yo me crié y me formé, y recuerdo haber votado por pura convicción –como lo he hecho siempre–, pero absolutamente presionado. Recuerdo haber llegado al recinto en aquella oportunidad pensando en lo que había significado la toma de esa decisión tras haber consultado con distintas organizaciones y con todas las

instituciones de mi provincia. También recuerdo que llegué con una encuesta en la mano. En este mismo recinto, alguno me exhibió las encuestas de Córdoba que decían que se votaba 25 días después de ese 15 de julio. No soy gobernador –si lo fuese no estaría sentado acá– y no sé si mi voto tuvo algo que ver; lo que sí sé es que esa noche del 15 de julio del año pasado volví a mi casa muy tranquilo y convencido de que había hecho lo que debía hacer, independientemente de quien se molestara o enfadara.

El miércoles de la semana pasada –siguiendo una frase del senador Fernández–, tuvimos un día histórico porque le devolvimos al Estado –no al gobierno– la posibilidad de disponer de su derecho en materia de hidrocarburos, y hace un rato le dimos el derecho a quien sufre para que deje de sufrir. Pero ahora no estamos regalando nada, sino reconociendo tarde –muy tarde, como dijo el senador Artaza– y casi con vergüenza el derecho humano básico indispensable que es el derecho humano a la identidad. Como dijo la senadora Morandini, esto no es una conquista de un gobierno ni la picardía de algún legislador, sino la consecuencia de organizaciones que se movieron con un coraje, una valentía y una decisión encomiables.

Señor presidente, usted sabe que yo no soy como los vampiros truchos, que, como no pueden chupar la sangre, chupan las medias; nunca le he hecho eso a nadie en mi vida. En este caso, debo sacarme el sombrero y reconocer que, si no fuera por ese coraje y esa valentía, difícilmente este Senado estaría hoy, tarde y con vergüenza, reconociendo el derecho humano básico de la identidad; así que, vayan para ellos mis felicitaciones.

Adelanto mi voto positivo.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

**Sr. Giustiniani.** – Empiezo por donde terminó el senador Juez. Éstas son las leyes del coraje; leyes arrancadas con coraje, con lucha y con participación, así que, junto con el senador Linares, adelantamos nuestro voto positivo, y ya hicieron lo propio los senadores Morandini y Juez desde el interbloque del Frente Amplio y Progresista.

Se trata de una larga historia de padecimientos, de discriminación y, quizás, de una corta

historia de logros. El primer antecedente legislativo lo presentó el diputado socialista Alfredo Bravo en 1999. En aquellos tiempos, era muy difícil presentar estos proyectos, y por eso digo que son leyes arrancadas del coraje, pero con el tiempo se fue construyendo un consenso social. En el año 2007 la entonces diputada socialista Silvia Burger también presentó un proyecto en este sentido.

Se fue dando una sucesión de hechos. El senador Filmus, como ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a través del decreto 122 del año 2003, les dijo a todos los establecimientos educativos que se debía garantizar el respeto por la identidad de género, dignidad e integración de las personas pertenecientes a las minorías sexuales. Dos años después, la Municipalidad de Rosario también sentaba un precedente importante, y luego hizo lo mismo el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En el mundo académico encontramos antecedentes en muchas universidades; en mi provincia, los encontramos en la Universidad del Litoral –como fue mencionado por el senador Sanz– y en la Universidad Nacional de Rosario.

En junio del año pasado, se dio el primer antecedente en el país, y a principios de este año, Alejandra Ironici recibió su nueva documentación en la provincia de Santa Fe, la cual fue otorgada por el gobierno de esa provincia; después, también lo hizo el gobierno de la provincia de Salta. Es decir que han sido una cantidad de hechos los que se han ido sucediendo y encadenando.

En el ámbito judicial, nos encontramos con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el año 2006, otorgó personería a la Asociación de la Lucha por la Identidad Transvesti y Transexual, y en diciembre de 2010 hubo un fallo histórico de la jueza en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Elena Liberatori, que reconoció el derecho a la identidad sexual de una persona trans sin ningún tipo de condicionamiento. Y de eso se trata, señor presidente.

Ésta es una ley que sienta un precedente para el mundo, y no estamos exagerando, ya que solamente Uruguay y México tienen leyes de estas características. Esta ley, que reconoce la vía administrativa para la rectificación registral del

sexo y cambio de nombre en los documentos de identidad, es el primer paso de vital importancia para empezar a revertir la realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razones de identidad de género. Con esta ley, se concreta el derecho a ser.

Y quiero terminar con lo que refería la senadora por Catamarca cuando recordaba a la activa Claudia Pía Baudracco, quien decía lo siguiente: “Tantos años de lucha y no podemos dejar de ser más que putas, costureras o peluqueras. Hasta ahí nos toleran. Ese destino nos imponen, y se supone que con eso nos tenemos que conformar, pero no nos conformamos”. Y como no se conformaron, hoy será ley la Ley de Identidad de Género.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.

**Sr. Petcoff Naidenoff.** – Estamos finalizando este debate, y durante esta sesión, he sentido en muchas oportunidades que estábamos realizando importantes avances en el campo de la ampliación de derechos, que se ha dado una fundamental reparación en nuestra vida democrática a los ciudadanos del país que han visto vulnerados sistemáticamente sus derechos, ya sea a una muerte digna –como bien señalamos en el debate anterior– o en este caso a la libertad de género, que es el tema cuyo abordaje estamos finalizando.

Creo que, con este proyecto, el Estado argentino da un gran paso en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los propios ciudadanos, y ésta es una conquista significativa en el marco de la propia comunidad. Como bien se ha dicho aquí, hoy estamos tomando la decisión de terminar en el marco normativo –y coincido parcialmente con el senador Fuentes en que es en el marco normativo, porque los procesos de discriminación y de intolerancia tienen que ver con una lucha cultural– con situaciones injustas, con dolores quizás inconmensurables y con situaciones de aislamiento al que se vieron y se ven sometidos muchos ciudadanos a diario. Con esta medida estamos institucionalizando y garantizando un derecho más, una conquista más.

Toda persona está amparada por la libertad en sentido amplio, entendida como derecho fundamental y, en ese contexto, a construir en el marco de su autobiografía y a optar por su propia identidad sexual. Esta decisión de cons-

truir la autobiografía pertenece a ese ámbito personalísimo en el marco de la libertad y del derecho a la intimidad, que es absolutamente infranqueable tanto para terceros como para el Estado mismo y que está amparado tanto por el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional como por los tratados con jerarquía constitucional. A partir de esta decisión, en el marco del estado de derecho, ya no son pertinentes las intromisiones a la libertad y a la privacidad, pues esta ley se suma a garantizar la oportunidad de vivir y ejercer el derecho a ser uno mismo. Es decir que reafirmamos el derecho a ser uno mismo.

Con este proyecto, reconocemos y ampliamos derechos para evitar discriminaciones que muchas veces comienzan en el seno familiar y se trasladan al ámbito laboral. Por esta razón, garantizando efectivamente la identidad de género, reafirmamos el ejercicio de otros derechos fundamentales, como los derechos al trabajo, a la educación y a la salud. Por cierto, éste es un avance para que el ser humano pueda vivir plenamente en libertad e igualdad, no en el sentido teórico, sino en el sentido práctico, desde el avance normativo. Es un instrumento de justicia que destierra estereotipos, permitiéndole a cada uno ser quien quiere ser.

Para finalizar, vaya fundamentalmente nuestro reconocimiento a las organizaciones, a los miles de ciudadanos que seguramente están acompañando este debate y que, a pesar de todas las dificultades, con constancia, valentía y decisión han luchado en las calles, en sus organizaciones, en los barrios, en los distintos espacios en procura de una sociedad más justa, más tolerante y más comprensiva. A partir de esta sanción, los argentinos quedamos comprometidos a construir un presente y un futuro de entendimiento y libertad, haciendo de éste un país mejor en el contexto de la comunidad internacional.

Con estas reflexiones, desde ya adelantamos el acompañamiento de la bancada de la Unión Cívica Radical al presente proyecto.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Señor presidente: le damos la bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados, estimado Julián, que está acompañándonos esta noche en este recinto.

Voy a hacer sólo algunas reflexiones, por cuanto no voy a repetir muchos de los conceptos y fundamentos constitucionales que se han dado.

En primer lugar, quiero valorizar a este Senado y al Congreso de la Nación, que han estado a la altura de las circunstancias para igualar derechos y permitir a la gente intentar ser más feliz, que es el verdadero derecho humano: el derecho a la felicidad, a tener la identidad sexual que cada persona quiera, a no ser marginado ni excluido de la sociedad. Detrás de cada persona diferente, hay mucha gente que sufre, y me parece que esta norma es reparadora, como lo fue la ley de matrimonio igualitario. Creo que ése fue el gran debate, porque, incluso, muchos de los diputados y senadores que, a lo mejor, tuvieron aquella vez posiciones contrarias a esa ley, hoy están entendiendo el sentido y el espíritu de esta norma. Sin ese debate, hubiera sido muy difícil que esta noche estuviéramos tratando esta norma.

Recién veía en los portales de Internet que el presidente de los Estados Unidos, Obama, ha planteado a la sociedad norteamericana el debate sobre el matrimonio igualitario, que está vigente en unos pocos estados de los Estados Unidos. Y sostuvo eso como un mensaje a esa nación, lo que indica indudablemente una evolución del pueblo norteamericano respecto de la igualdad y del derecho de las personas a elegir su vida, su opción de vida.

Me parece que la sociedad argentina es un poco mejor esta noche, como lo fue la noche del debate de la ley de matrimonio igualitario. Así vamos mejorando como sociedad, lo que es un hecho positivo por cuanto nos permite ir superándonos, ser un poco mejores, ser un poco más comprensivos, tratando de que la gente viva de acuerdo con sus convicciones, sus creencias, su propia identidad, y respetando el derecho de hacer con su cuerpo lo que realmente quiera. Esto es una convocatoria a la libertad individual que está garantizada en la vieja Constitución liberal del 53 y que la ley de matrimonio igualitario y esta iniciativa están ratificando.

De la misma manera que hizo recién el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, quiero hacer un reconocimiento a las organizaciones y a muchos hombres y mujeres que

han luchado durante muchos años por estos derechos.

Por todos estos motivos, nuestro bloque va a votar afirmativamente este proyecto de ley.

**Sr. Presidente.** – En primer lugar, se va a votar la autorización para hacer inserciones en el Diario de Sesiones.

–Se practica la votación.

**Sr. Presidente.** – Aprobado.

A continuación, se va a votar la autorización para la abstención solicitada por la señora senadora Di Perna...

**Sr. Pérez Alsina.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.

**Sr. Pérez Alsina.** – Es para pedir autorización para abstenerme de votar respecto del artículo 5°. Aclaro que estoy de acuerdo con el primer párrafo de dicho artículo, pero no con el segundo párrafo, que se refiere a la parte de menores de edad sin consentimiento de los tutores. Entonces, pido autorización para abstenerme de votar el artículo 5°.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

**Sra. Estenssoro.** – En el mismo sentido que lo hizo el señor senador preopinante, pido permiso para abstenerme de votar el artículo 5°, sólo en el párrafo que habla del supuesto en que no exista consentimiento de los padres o del representante legal.

**Sr. Presidente.** – ¿Es el mismo párrafo al que se refirió el señor senador Pérez Alsina?

**Sra. Estenssoro.** – Sí, el mismo párrafo.

También pido abstenerme de votar los artículos 11 y 12, cuando se refiere al menor que no tuviera consentimiento. Pido autorización para abstenerme de votar porque tengo dudas. Hago esto por una razón de prudencia y, desde ya, me excuso si me estoy equivocando. Pero cuando se trata de un menor de edad, si no hay consentimiento de los padres o del tutor, me parece que judicializar este tema y esta relación antes de los 18 años, antes de la mayoría de edad, puede tornarse una situación difícil.

**Sr. Presidente.** – Se van a votar las autorizaciones para abstenerse solicitadas por los senadores Di Perna, Pérez Alsina y Estenssoro.

– Se practica la votación.

**Sr. Presidente.** – Aprobadas.

Tiene la palabra el señor senador Sanz.

**Sr. Sanz.** – Es para solicitar una autorización especial: como en el curso del debate hemos sido tan estrictos con las organizaciones presentes, creo que sería oportuno permitirles que se exterioricen en el momento de la votación.

**Sr. Presidente.** – Vamos a someterlo a votación. Me parece que hay un solo senador que está en contra... (*Risas.*)

– Aplausos en las galerías.

**Sr. Presidente.** – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en una sola votación, el proyecto en consideración, con la aclaración de que han sido autorizadas las abstenciones de la senadora Di Perna en general y en particular, de los senadores Estenssoro y Pérez Alsina en el artículo 5º y de la senadora Estenssoro en los artículos 11 y 12.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Se registran 55 votos por la afirmativa y una abstención en general, con la aclaración de que la senadora Di Perna se abstuvo de votar tanto en general como en particular, la senadora Estenssoro se abstuvo de votar los artículos 5º, 11 y 12 y el señor senador Pérez Alsina se abstuvo de votar el artículo 5º.

– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>1</sup>

**Sr. Presidente.** – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.<sup>2</sup> (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

## 15

### TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

**Sr. Secretario** (Estrada). – Si los señores senadores toman asiento, podemos tratar los temas que están pendientes de las sesiones an-

teriores. Son apenas 5 o 6 minutos y terminamos la sesión.

Comenzamos con los tratamientos sobre tablas a solicitar sobre los siguientes expedientes: S.-889/12; S.-727/12, S.-794/12 y S.-891/12; S.-896/12; S.-899/12; S.-900/12; S.-901/12; S.-919/12; S.-944/12; S.-1.078/12; S.-142/12; S.-313/12; S.-723/12; S.-724/12; S.-725/12; S.-904/12; S.-21/12; S.-487/12; S.-129/12 y S.-820/12; S.-920/12; S.-1.067/12; S.-1.068/12; S.-1.070/12; S.-1.071/12 y S.-106/12; S.-1.098/12; S.-1.099/12; S.-1.144/12; S.-1.036/12 y S.-1.142/12; S.-958/12; S.-556/12; S.-615/12; S.-803/12; S.-802/12; S.-804/12; S.-776/12; S.-2.481/11; S.-2.589/11; S.-2.694/11; S.-2.814/11; S.-2.816/11; S.-905/12; S.-923/12; S.-924/12; S.-925/12; S.-926/12; S.-960/12; S.-973/12; S.-974/12; S.-346/12; S.-511/12; S.-705/12; S.-775/12 y S.-1.023/12; S.-783/12; S.-798/12; S.-830/12; S.-1.150/12; S.-1.151/12; S.-1.152/12 y S.-1.028/12.

Además de estos proyectos, quedan los reservados en mesa. Se trata de todos proyectos de declaración y son los siguientes: S.-1.187/12, S.-1.188/12, S.-1.183/12, S.-1.185/12, S.-1.184/12, S.-351/12, S.-581/12, S.-817/12, S.-1.116/12, S.-1.117/12, S.-1.118/12, O.D.-357/12 (S.-2385/11), S.-539/12 y S.-546/12.

Corresponde habilitar el tratamiento sobre tablas.

**Sr. Presidente.** – En consideración, el tratamiento sobre tablas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– Se practica la votación.

**Sr. Presidente.** – Aprobado.

– Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:

Beneplácito por la entrega del Premio Alfaguara de novela al autor argentino Leopoldo Brizuela. (S.-889/12.)

Beneplácito por la entrega del Premio Hans Christian Andersen a la escritora María Teresa Andruetto. (S.-727, 794 y 891/12.)

Megaoperativo en el cual fueron incautados 280 kilos de cocaína. (S.-896/12.)

Realización del Campeonato Mundial FIM Maxxis de Enduro. (S.-899/12.)

Día Mundial de las Familias. (S.-900/12.)

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

<sup>2</sup> Ver el Apéndice.

*Votación Nominal*

## 130° Período Legislativo - Ordinario - 3° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE DERECHO A LA  
IDENTIDAD DE GÉNERO

ORDEN DEL DÍA 269  
(CD-75/11)

## VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 2	Fecha: 9-05-12	Hora: 21:07
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los votos emitidos	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: BOUDOU, Amado	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	56	Votos afirmativos:	55
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	56	Abstenciones:	1
Ausentes:	16		
Votos Afirmativos Necesarios:	28	<b>RESULTADO de la VOTACIÓN</b>	<b>AFIRMATIVA</b>

Observaciones:

La senadora Estenssoro solicita autorización para abstenerse en los artículos 5° segundo párrafo, 11° y 12° y el senador Pérez Alsina en el artículo 5° segundo párrafo.

Modificaciones realizadas el 9/05/12

*Votación Nominal*

## 130º Período Legislativo - Ordinario - 3º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE DERECHO A LA  
IDENTIDAD DE GÉNERO

ORDEN DEL DÍA 269  
(CD-75/11)

## VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 2

Fecha: 9-05-12

Hora: 21:07

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los  
miembros del cuerpoMayoría Requerida: mas de la mitad de los  
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: BOUDOU, Amado

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUIRRE, Hilda Clelia	AFIRMATIVO	LABADO, María Ester	AFIRMATIVO
ARTAZA, Eugenio Justiniano	AFIRMATIVO	LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO
BARRIONUEVO, Walter Basilio	AFIRMATIVO	LEGUIZAMÓN, María Laura	AFIRMATIVO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	LINARES, Jaime	AFIRMATIVO
BERMEJO, Rolando Adolfo	AFIRMATIVO	LOPEZ, Osvaldo Ramón	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	LORES, Horacio	AFIRMATIVO
BLAS, Inés Imelda	AFIRMATIVO	LUNA, Mirtha María Teresita	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MANSILLA, Sergio Francisco	AFIRMATIVO
BORELLO, Marta Teresita	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AUSENTE	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO
CABRAL, Salvador	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Ángel	AUSENTE
CANO, José Manuel	AUSENTE	MEABE de MATHO, Josefina Angélica	AUSENTE
CASTILLO, Oscar Aníbal	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CIMADEVILLA, Mario Jorge	AUSENTE	MONLLAU, Blanca María del Valle	AUSENTE
COLAZO, Mario Jorge	AUSENTE	MONTERO, Laura Gisela	AFIRMATIVO
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	MORANDINI, Norma Elena	AFIRMATIVO
DE LA ROSA, María Graciela	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AUSENTE
DI PERNA, Graciela Agustina	ABSTENCIÓN	NIKISCH, Roy Abelardo	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	AFIRMATIVO	PERSICÓ, Daniel Raúl	AUSENTE
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Aníbal Domingo	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AUSENTE	RACHED, Emilio Alberto	AFIRMATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIMENEZ, Sandra Daniela	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GODOY, Ruperto Eduardo	AFIRMATIVO	ROJES de ALPEROVICH, Beatriz L.	AFIRMATIVO
GONZALEZ, Pablo Gerardo	AFIRMATIVO	ROLDAN, José María	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	RUIZ DÍAZ, Elsa Beatriz	AFIRMATIVO
HIGONET, María de los Angeles	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
IRRAZABAL, Juan Manuel	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	AUSENTE
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AUSENTE
JUEZ, Luis Alfredo	AFIRMATIVO	VERNA, Carlos Alberto	AUSENTE

Entiendo que se trata de un tema muy sensible, pero comprendo también que no podemos permitirnos continuar en esta situación de vacío legal respecto de este asunto. Nos urge legislar sobre una pronta solución a este problema, dando un marco legal dentro de nuestro ordenamiento jurídico, a fin de evitar alargamientos terapéuticos abusivos, que solamente producen más sufrimientos.

Como católico que soy, porque he sido educado según las enseñanzas cristianas, traigo a colación lo sostenido por Su Santidad el querido papa Juan Pablo II, quien en su encíclica *Evangelium vitae* afirma: “De ella (la eutanasia) debe distinguirse la decisión de renunciar al llamado ‘ensañamiento terapéutico’ o sea ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar, o bien por ser demasiado gravosas para él o su familia. En estas situaciones, cuando la muerte se prevé inminente e inevitable, se puede en conciencia ‘renunciar’ a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, sin interrumpir sin embargo las curas normales debidas al enfermo en casos similares (Congregación para la Doctrina de la Fe Declaración *iura et bona*, sobre la eutanasia, 5/5/1980). La renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados no equivale al suicidio o a la eutanasia; expresa más bien la aceptación de la condición humana ante la muerte” (*Evangelium vitae*, N° 65, Ed. Claretiana, 1995).

Creo no equivocarme con tan delicado asunto y estar haciendo lo correcto. Entendiendo que el voto afirmativo a la presente ley no significa un acto de soberbia, sino muy por el contrario, un acto impregnado de buena fe.

3

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA CORREGIDO

**Derecho a la identidad de género.**  
**(O.D.-269/12)**

Señor presidente:

El tratamiento de esta ley me lleva a reflexionar acerca del dilema existencial del ser o no ser. La afrenta a que nos expone la soberbia, la angustia del amor despreciado, la espera del juicio, la arrogancia del poderoso y la humillación. Porque lo más lindo que nos puede pasar es tener una vida para vivirla plenamente y de la mejor manera posible, sobrepasar lo malo para disfrutar con más fuerza lo bueno.

Esta ley alcanza a mayores de dieciocho años y a menores que podrán hacerlo con el consentimiento de sus padres, y responde a la “vivencia individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”. Estamos hablando de igualdad de derechos.

Las personas tenemos derecho a rectificar nuestro nombre, nuestro sexo y la imagen registral que pueda existir en los registros públicos donde estos datos figuran, sin intervención quirúrgica alguna, sin terapias hormonales u otro tipo de tratamiento. La voluntad, la decisión de cada una de las personas no obliga al cambio de sexo, ni al tratamiento de hormonas ni al sometimiento a pericias psicológicas o médicas como si estuviéramos hablando de patologías.

Cito a Claudia Pía Baudracco, activista y militante. Su muerte nos hace reflexionar y pone de manifiesto un hecho lamentable que refleja la necesidad de contar con esta ley de identidad de género. Ella murió sin tener su DNI, sola, quizás por elección, aclamando justicia, y seguramente se fue soñando con una igualdad para todos y todas y luchando hasta el instante final contra la hipocresía de quienes no se animan a mirar al otro.

No es suficiente con afirmar “bueno, que hagan lo que quieran con sus vidas y con sus cuerpos”, consintiendo “noblemente” en dejarlos vivir como quieran y aceptando que regularicen su identidad, cambiando el nombre del documento.

Se trata de reconocerlos como sujetos de derechos. Ésa es una tarea comunitaria: “Un mundo que acepte las diferencias”. En la práctica consiste en crear políticas de inclusión que signifiquen inclusión en educación, en empleo, en trabajo, viviendas, salud.

Durante siglos, la discriminación de género posicionó a transgéneros, travestis y homosexuales en la marginación cuando buscaban empleos o contratos, así como los propietarios de viviendas se negaban a alquilarles departamentos.

La crueldad de la discriminación muchas veces empezaba por la propia casa, cuando los niños mostraban características que no respondían al género varón o mujer según su anatomía. Cuando se mostraban “de otro modo” y sorprendían a sus padres comportándose de manera inesperada: las niñas jugaban como varones y viceversa.

Ni los pediatras ni los psicólogos estaban informados, la convivencia familiar estallaba en desesperados esfuerzos por cambiar a ese hijo o a esa hija que “no era como todo el mundo”. En realidad, no existe una persona “como todo el mundo”.

Quiero distinguir el modelo que introdujo *Página 12* con el suplemento “Soy”, que abrió el espacio para la palabra pública de la diversidad.

La política no es ajena a esta demanda de reconocimiento, estamos por aprobar una ley que facilitará reconocer al otro en la línea que nuestro país proponía ya el 12 de marzo de 2004, cuando el canciller Rafael Bielsa, en Roma, informó personalmente al jefe de la Iglesia Vaticana que la Argentina apoyaría la resolución de la ONU de no discriminar por orientación sexual e identidad de género, y pidió a las instituciones que militan por estos derechos que hagamos pública dentro y fuera del país la disposición plena de apoyo del presidente argentino.

Recién el 17 de junio de 2011, nueve años después, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la Resolución sobre las Violaciones de Derechos Humanos por Orientación Sexual e Identidad de Género.

Esta ley se basa en los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género. Su preámbulo cita que se reconocen las violaciones de los derechos humanos, marginación, estigmatización y prejuicios, basadas en la orientación sexual y la identidad de género u otra característica.

Sus principios nos dicen que todas las personas tenemos derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos. La ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier acto de discriminación, y nadie deberá sentirse obligado a someterse a ningún procedimiento como requisito para el reconocimiento legal de su identidad.

Menciono esto ya que Úrsula Sabarese, una mujer chaqueña, presentó una acción declarativa donde expresa claramente que ella es lo que es ante el Juzgado del Menor y la Familia de la ciudad de Resistencia, Chaco, y el fallo dio a su favor. Hoy es libre, se sacó esa condena social.

Úrsula relata que desde su primera infancia le atraían las actividades lúdicas femeninas desechando las desarrolladas por varones, que se sintió distinta que sus compañeros. Que cursó sus estudios primarios hasta finalizarlos, no así con los secundarios, los que debió completar luego de concurrir a varios centros educativos, debido a que sufrió persecuciones, insultos y malos tratos de compañeros y docentes. Que al finalizar sus estudios trabajó como personal de maestranza de la UNNE, pero sentía dolor al tener que ocultar sus elecciones con el fin de conservar su empleo. Explicita que, cada vez que necesitó buscar trabajo, las puertas se le cerraban debido a que estaba obligada a conservar su imagen de “Julio”, cuando por dentro quería y sentía ser “Úrsula”.

Agrega que se manifestó entre amigos como Úrsula, que se sintió muy bien al realizar su vida vestida y maquillada y al ser reconocida socialmente, así que eligió su nombre a los ocho años aproximadamente, y que lo extrajo de una telenovela, de la que tiene gratos recuerdos. Sostiene que su padre siempre se percató o intuyó su elección personal, que nunca la molestó con el tema y que sólo una vez discutieron y que sus tres hermanos asumieron de distinta manera su situación.

Que desde el año 2000 se manifestó socialmente como Úrsula y en los últimos años logró insertarse en actividades relacionadas con los derechos humanos, HIV, identidad de género y diversidad sexual; que dicha militancia le abrió las puertas y encontró un reconocimiento en sus pares y personas que trabajaban en estos temas, ámbitos en los que siempre se dio a conocer con

el nombre de Úrsula. Además, detalla otras situaciones traumáticas y episodios desagradables y pone de manifiesto los padecimientos que sufre cuando debe exhibir su documentación, ya que no hay coincidencia con su apariencia física.

Que, animada por el deseo de poner fin al menoscabo en sus derechos civiles y sociales, solicita en esa declaratoria la reasignación de sexo, cambio de nombre, rectificación de partida de nacimiento e inscripción como perteneciente al sexo femenino y anotación como Úrsula Ximena Sabarece.

Aduce en su declaratoria lo siguiente:

“Y aquí es donde entran en juego mis derechos humanos fundamentales en torno a mi persona. La Constitución Argentina en el preámbulo postula ‘asegurar los beneficios de la libertad’ y esta directiva se refleja claramente en el artículo 19 y ‘si una persona al construir su autobiografía realiza una determinada opción sobre su identidad sexual, esta decisión pertenece a ese ámbito de derecho infranqueable al Estado y a los particulares, que es la libertad de intimidad. Podrá molestar a algunos, escandalizar a otros, pero no existen razones jurídicas que permitan alguna clase de intromisión u obstrucción en el ejercicio del derecho a ser uno mismo sin causar daño directo o inmediato a terceros. Por otra parte no debemos perder de vista el principio “*pro homine*” o “*pro persona*”. Al respecto cabe recordar que este principio constituye ‘un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria’”.

La adecuación del sexo es en definitiva un medio terapéutico destinado a respetar el derecho a la salud psicofísica y también el derecho a la identidad, que comprende también la sexual, protegidos en convenciones internacionales de derechos humanos. El derecho a la salud como uno de los derechos humanos fundamentales se entiende desde una óptica integral, comprensiva de la salud psíquica y física. La salud humana constituye un bien jurídico individual pero también un bien jurídico social. “Está comprendido dentro del derecho a la vida, que es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva, que, obviamente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional”.

Considero que, por aplicación de los Principios de Yogyakarta, sobre la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, atento que la República Argentina es signataria del mismo, y en la jurisprudencia nacional obran antecedentes de su aplicación se pretende que el/la juez con la sola voluntad de la actora lleve adelante una sentencia favorable en consideración a las

constancias de autos, garantizando de este modo los derechos constitucionales vinculados con el ejercicio de ciudadanía, dándole a este pedido la identidad correcta en el sentido de que todos podemos disponer de nuestro propio cuerpo y nuestro nombre. Apelamos en términos estructurales al derecho a la libertad de expresión de género circunscripta en el continente de los derechos humanos y el derecho a la identidad. El derecho a la libertad de expresión de género involucra la reconocibilidad de la identidad, lo cual incluye el derecho al nombre propio, a la disposición del propio cuerpo para que se exprese de la manera más efectiva para cada cual y la libertad de expresar la transgeneridad en los propios términos que desea la persona.

El fallo dictado por la jueza del menor y la familia doctora Laura Varela es primero en su clase en la provincia del Chaco, ya que por criterio de la jueza no se invadió la intimidad de Úrsula con exámenes o medidas que vulneraran su dignidad criminalizando o patologizando su pedido, y considera las garantías constitucionales y los tratados internacionales con igual jerarquía y que corresponde a los jueces proteger derechos cuando no hay una legislación adecuada. Reconoce que es un problema existencial que el derecho no puede soslayar y que la petición de Úrsula se enmarca en el ejercicio de la autonomía de su voluntad y que corresponde el reconocimiento a su honra y su dignidad.

En reconocimiento a Néstor Kirchner, a la valentía de seres como Claudia, como Úrsula y como tantísimas mujeres y hombres que sufren ese debate interno, resistiendo, planteándose el porqué de las injusticias, reclamando la importancia de ser y pertenecer, siendo conscientes que lo mejor que cada uno tiene es esa personalidad que formamos en relación a las experiencias que vivimos, aprendiendo y teniendo la certeza que en algún momento los puntos se unirán y que con cada paso que damos nos aventuramos hacia ese lugar que consideramos o creemos que nos toca en el mundo, el que formará nuestra personalidad y nuestro futuro, votaré a favor de esta iniciativa.

4

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA RIOFRIO

**Derecho a la identidad de género.**

**(O.D.-269/12)**

Señor presidente:

En horas previas a esta sesión, y a través de un artículo periodístico, recordé claramente el caso de Mariela Muñoz, quien había cuidado niños en estado de abandono y pretendía hacerlo con dos pequeñas más.

El tratamiento mediático fue atroz. Como era de esperar, la Justicia retiró e institucionalizó a las pequeñas y todos tranquilos.

Yo me arriesgo a pensar que, aún sin esta ley, ningún juez de la República se animaría a negar derechos basado en la identidad de género.

Pasaron poco menos de dos décadas y la sociedad argentina está encaminada a una nueva construcción social en la que se incorporan categorías, conceptos, modelos y se amplían derechos.

Esta construcción se realiza en base al irrestricto respecto a los derechos humanos, eje de la política de Estado llevada adelante por el ex presidente Néstor Kirchner y por Cristina Fernández de Kirchner, porque los tiempos y la sociedades cambian, pero cambian mucho más y sin tanto dolor con construcciones políticas que priorizan el ejercicio de las libertades y de la igualdad.

Subsanar siglos de marginalidad, violencia, exclusión y discriminación sistemática no es tarea sencilla; demanda promover nuevos dispositivos o acciones afirmativas que permitan la incorporación de todos los que fueron quedando en los márgenes de sistema.

El proyecto que hoy tratamos es sin dudas uno de esos instrumentos. Es un proyecto superador respecto a leyes de identidad de género que existen en alrededor de 40 países, ya que contempla no sólo la rectificación de sexo, nombre e imagen, sino la atención médica sanitaria que esto conlleva.

Ciertamente, es la hora de votar con la valentía de la memoria, recordando las responsabilidades en la construcción de la discriminación y la violencia. Éste es un verdadero reto al statu quo imperante.

Estamos dando un paso hacia una sociedad plural, donde cada vez sean menos los que simplemente toleren, como se tolera la enfermedad, la basura de la ciudad, con resignación, y sean más los que acepten la dignidad humana de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Por las razones expuestas adelanto mi voto favorable al dictamen en tratamiento y solicito el acompañamiento de mis colegas.

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA AGUIRRE DE SORIA

**Derecho a la identidad de género.**

**(O.D.-269/12)**

Señor presidente:

El proyecto que estamos tratando hoy en este recinto, Ley de Identidad de Género, es el fruto de una larga lucha de las distintas organizaciones que representan a las personas con esta problemática por conseguir un derecho que les fue negado durante mucho tiempo, pero hoy este Congreso de la Nación ha demostrado que

está a la altura de las circunstancias y está dispuesto a restituir los derechos civiles y humanos a las personas que así lo reclaman.

Así lo viene demostrando este Congreso Nacional en estos últimos años, en los que su forma de trabajar ha cambiado hacia un estilo implementado por los parlamentos más avanzados del mundo civilizado, como lo es la “forma participativa”. Es decir que la casa en donde están los representantes populares se convierte en una verdadera caja de resonancia haciendo participar activamente a los principales actores o beneficiarios de las leyes que en ella se elaboran. En esta dirección se invitó a las principales asociaciones y organismos no gubernamentales que defienden a las personas “trans”, que son el objeto primordial de la presente ley, otorgando de esta manera una legitimidad incuestionable a la norma.

Como decía, el proyecto en cuestión tuvo un intenso, profundo y respetuoso tratamiento dentro del camino parlamentario que exige el trabajo legislativo en las distintas comisiones internas, no sólo en este Senado sino también en la Cámara de Diputados. Soy testigo de ello ya que provengo de un mandato de 4 años en la Cámara Baja, situación que me ha hecho conocer e informarme en la profundidad posible de la temática y la difícil situación por la que muchas veces tiene que pasar una persona que vive en esta condición, circunstancias que coadyuvieron para convencerme finalmente de que mi voto hoy sea positivo, tanto en general como en particular.

Toda sociedad en la práctica elige qué sector va a quedar dentro de lo permitido, dentro de una moral media, y cada sociedad elige también qué es lo que va a quedar al margen, es decir, fuera de esa línea imaginaria entre lo permitido y lo que no, decide también las conductas sociales que quedarán tal vez pisando esa línea llamada *border line*, tan peligrosa para ciertos grupos minoritarios; y muchas veces, señor presidente, y digo muchas sociedades, deciden hacer un “genocidio” encubierto con esos sectores minoritarios que están afuera de la legalidad, porque como decía el sociólogo y filósofo argentino Daniel Feierstein, en todo genocidio hay fases o pasos, y yo creo que a estos grupos se les puede aplicar esas fases perfectamente porque prácticamente por décadas fueron cercenados derechos fundamentales que obstaculizaban el goce pleno de otros derechos importantes, que sí gozan otros ciudadanos. Quiero remarcar, señor presidente, que nosotros no debemos tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; todos somos iguales ante la ley por imperio del artículo 16 de nuestra Constitución Nacional.

Esta ley propone no estigmatizar y no patologizar a las personas que por distintas razones o circunstancias tienen una orientación sexual diferente. Entiendo también que estaremos aprobando una ley que ayudará en forma significativa a consolidar el reconocimiento y el respeto por un derecho fundamental, como lo es el derecho a la “identidad”, abriendo paso a un goce más

pleno de otros derechos no menos importantes, como el derecho a la salud, la educación, el trabajo y la cultura, por lo que podemos hablar de una ley notablemente inclusiva.

Dentro de la construcción de lo que la psicología social llama la “otredad” del yo, vemos que durante años esa otredad hacia las personas “trans” fue construida por nuestra sociedad ayudada acaso por desconocimiento del fenómeno o tal vez por “miedos” en una “otredad negativa”, arrastrando una serie de prejuicios dañinos y no compatibles con ninguna moral de valía, con consecuencias finales no deseadas para ellos, sus respectivas familias ni para la sociedad misma, ya que las personas en estos casos gran cantidad de veces terminaron en el “suicidio” porque se sentían estigmatizadas, señaladas, no aceptadas. En este sentido quiero recordar la frase que viene al caso aquí y debe servirnos de reflexión, que dice: “Una sociedad que excluye a cualquiera de sus miembros es una sociedad empobrecida”.

Algunas veces he visto y he escuchado de los propios protagonistas en medios de difusión situaciones angustiantes por las que han tenido que pasar, yo diría hasta situaciones humillantes como, por ejemplo, al ir a votar antes de la reforma electoral última, cuando votaban separados hombres de mujeres; también al salir o entrar de nuestro país u otros países, cuando tenían que pasar por los controles identificatorios, o bien ante los malos tratos que padecen a raíz de la poca formación de algunas fuerzas de seguridad. Esperemos que esta normativa ayude a mitigar en el futuro todos aquellos sufrimientos sin razón, porque detrás de todos esos sin-sabores hay un alma, una persona que es discriminada, privándosele así de los derechos más elevados de la condición y dignidad humana.

En mi provincia, La Rioja, como en otras, en estos últimos tiempos se han conocido casos resonantes de reconocimiento de este derecho por la vía judicial. Esto también ha servido para enriquecer los antecedentes dentro del debate parlamentario, constituyéndose en fuente de la presente ley. Quisiera mencionar aquí que justamente en el día de ayer falleció en mi provincia, La Rioja, Dahiana Strangers, primera transexual riojana y tercera en el país, que se desempeñó brillantemente en los medios de comunicación riojanos, y hoy es reconocida con sentimiento por la comunidad riojana. Pero ella no sólo fue un ejemplo en su lucha por conseguir estos derechos específicos, sino que también fue un ejemplo de persona por su sensibilidad hacia los más necesitados y por tesón en el trabajo. Desde aquí vaya mi reconocimiento.

Finalmente, señor presidente, para ir terminando quisiera expresar que tengo la seguridad de que con esta ley la Argentina se coloca en la avanzada de los países no sólo de Latinoamérica sino dentro del contexto mundial, ya que dentro de lo que es reconocimiento de los derechos humanos el actual gobierno de la señora presidenta Cristina Fernández se ha empeñado

en lograr e implementar comparativamente una de las mejores políticas públicas.

6

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA RIOFRIO

**Modificación de la ley que regula los derechos del paciente en relación con los profesionales e instituciones de salud.**

(O.D.-62/12)

Señor presidente:

Cuando hablamos de “muerte digna” debe quedar claro que hablamos de un derecho, en tal sentido cabe Preguntarse: ¿quién decide qué es vivir y morir con dignidad? Sin lugar a dudas el más habilitado para evaluar hasta dónde avanzar es el propio enfermo padeciente.

Al legalizar el derecho a morir con dignidad no le estamos haciendo un favor a nadie, no lo hacemos por conmoción ni por compasión, lo hacemos desde nuestro deber de legislar con un criterio amplio basado en la dignidad de las personas.

Nos enseñaron que la muerte llega de manera natural y eso nos ha condicionado a comprender las diferentes maneras en que se puede dar el final de la vida, por lo que hemos dejado en situación de “desamparo y desvalimiento” a aquellos pacientes expuestos a tratamientos extraordinarios que no sirven para curar, mejorar, ni aliviar el dolor, debiendo soportar agonías indignas.

Es hora de cambiar nuestra manera de pensar. Si concebimos la muerte como un acto humano, que nos involucra de manera activa –en oposición a la pasividad de la muerte natural–, será más fácil respetar el principio de autonomía que nos asiste como personas.

Por otra parte, se ha malinterpretado el juramento hipocrático de los médicos, a quienes en su deber de asistir en la enfermedad del paciente, se les ha exigido la prolongación de la vida, a costa del respeto a la vida misma.

Porque de esto también tenemos que hablar, el negocio millonario que hay detrás de estos tratamientos médicos desproporcionados, que ante el vacío legal existente encuentran en el no cumplimiento de la manifestación de voluntad el justificativo ideal para la prolongación de la enfermedad terminal.

El paso que hoy estamos dando en materia de derechos humanos también posibilita salir del análisis aislado de casos particulares, para ir por otro objetivo más ambicioso: el de establecer políticas públicas que garanticen, a quienes lo elijan y deseen, el derecho a morir con dignidad.

Cabe destacar que los puntos centrales de la media sanción son los siguientes:

– Reconoce la autonomía de la voluntad al establecer que “el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar

determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”.

– Los/as niños/as y adolescentes, en los términos de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tendrán derecho a intervenir a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud.

– En el marco de esta potestad, “el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado”.

– El paciente también “podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable”.

– En todos los casos la negativa o el rechazo de dichos procedimientos no significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente.

– En relación con el consentimiento informado, éste se entenderá como la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales, emitida luego de recibir por el profesional interviniente información clara, precisa y adecuada con respecto a: “el derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o que produzcan sufrimiento desmesurado, también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable”.

– Como parte de este consentimiento informado, se reconoce el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de la enfermedad o padecimiento.

– Es obligatorio contar con el consentimiento informado del paciente. Ante el supuesto de incapacidad del mismo, o imposibilidad de brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico o psíquico, el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas en el artículo 21 de la ley 24.193 de Transplantes de Órganos y Tejidos, con los requisitos y en el orden de prelación allí establecido.

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA DÍAZ

**Modificación de la ley que regula los derechos  
del paciente en relación con los profesionales e  
instituciones de salud.**

(O.D.-62/12)

Señor presidente:

Curiosamente, hoy que nos toca legislar lo que se ha dado en llamar muerte digna, tenemos que aclarar que consideramos que este debate es a favor de la vida.

No es cierto que la vida y la muerte se opongan. Tanto la lógica formal como la dialéctica afirmarían esta posición, donde la muerte no puede ser la vida, en la lógica formal, o donde son contradictorias, en la lógica dialéctica.

Con una visión integral, desaparecen ambas afirmaciones, para dar paso a una convivencia e incluso complementariedad. En efecto, la vida existe gracias a la muerte y ésta es impensable sin la vida. No sólo son fenómenos concomitantes, desde la concepción, sino interactivos. Mientras vivimos, numerosos fenómenos hablan de la generación de la muerte en cada uno de nuestros órganos y en la totalidad de nuestro ser. Y la muerte no termina con nosotros en la historia, ni en las realizaciones, ni en el recuerdo, ni en la generación de nueva vida.

La ley que estamos por sancionar recibe críticas. La más importante se refiere a la suspensión del soporte vital cuando éste tiene el único propósito de prolongar la vida sin ningún beneficio proporcional. Se dice que la autonomía del sujeto no puede oponerse al avance de la ciencia en tanto ésta le asegura el beneficio de la atención de su salud. Pero este supuesto no resiste cuando nos encontramos frente a situaciones en las que ese beneficio no favorece al sujeto sufriente, sino en todo caso a los servicios de salud o, en el mejor de los casos, a la ciencia misma.

Por el contrario, si la atención no puede curar, al menos siempre puede calmar, cuidar, acompañar. Es esta tesis, contra la supuesta omnipotencia del sistema de salud, la que se define hoy. Y donde la ética puede instaurar la unidad entre el principio de autonomía del sujeto y el principio del beneficio pretendido por la ciencia.

Fue el divorcio entre ambos principios el que justificó hasta ahora la distancia o encarnizamiento terapéutico, cuyo mayor defecto no es el abuso de la tecnología, dado que hasta el mismo paciente podría solicitarlo. Y tampoco los costos, que de haber un exceso de recursos no importaría en cuanto gasto superfluo. Sino el oído sordo de la atención a la voluntad del sujeto que la rechaza.

Y no se está llamando eufemísticamente aquí muerte digna a lo que sería un homicidio, como se osa decir

cuando no se advierte que el asesinato requiere una voluntad que no sea generosa con la persona a matar, situación excluida completamente de este proyecto.

Tampoco puede confundirse la muerte digna con el suicidio, porque el proyecto delega en la sociedad en su conjunto, a través de sus organismos constitucionales, la decisión de tomar las medidas que el sujeto consienta informadamente, de modo que los procedimientos siempre dependen de terceros.

Tampoco es válida la oposición al proyecto cuando se lo considera abandono de paciente, ya que el sistema y sus servicios deben seguir brindando todas las medidas necesarias que requiera la calma del dolor y la confortabilidad del sujeto.

No es coherente oponer a la religión con las medidas que suponen una muerte digna. Y decimos que no es coherente porque en 1980 la Iglesia Católica, en su “Declaración sobre la eutanasia”, admitió que el médico pueda “renunciar a tratamientos que procurarían una prolongación penosa y precaria de la existencia”.

El proyecto también ha tenido la virtud de acotar los procedimientos legales y las circunstancias de la muerte digna en cada caso, de manera que no quede librada a una decisión discrecional en su interpretación y desarrollo.

Con esta sanción proponemos que no hay una naturaleza permanente y absoluta del hombre y de las cosas, sino que tal naturaleza también depende de las respuestas que la sociedad no puede omitir frente a cada problema en cada momento de la historia, considerando el mayor bien general, particular e individual. Estamos prestando atención a la condición autotransformadora que es propia del hombre, en pos de la emancipación para acceder al dominio de su vida, en aras de lo que considere sus más altos valores.

De aquí nuestro voto positivo por este proyecto que modifica a la ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, modificación en lo que respecta a la muerte digna y a la complementariamente acertada incorporación de los cuidados paliativos.

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA FELLNER

**Derecho a la identidad de género.**  
(O.D.-269/12)

Señor presidente:

El proyecto de ley que estamos considerando, venido en revisión de la Cámara de Diputados, por el cual se establece un marco jurídico adecuado para el reconocimiento y la tutela del derecho a la identidad de género, se inserta en un contexto político determinado por una continua y sistemática ampliación de derechos, fundamentalmente a favor de aquellas minorías que

históricamente fueron ignoradas y vieron vulnerados sus derechos.

Hoy más que nunca somos conscientes de aquella frase tan clara, precisa y contundente de Evita, que decía que allí donde hay una necesidad hay un derecho. Y no solo somos conscientes de ello sino que además le damos vida a este postulado y obramos en consecuencia.

Este proceso de ampliación de derechos se inició en el año 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner, y ha sido continuado y profundizado por nuestra presidenta Cristina Fernández. Sin duda que este proceso no estuvo exento de oposiciones y trabas provenientes de aquellos sectores que no conciben al reconocimiento y a la ampliación de derechos de las minorías como una necesidad impostergable. Pero aún así, los resultados son notoriamente positivos. En este sentido, uno de los hitos más importantes está dado por la sanción de la ley de matrimonio igualitario.

En esta oportunidad, estamos considerando una iniciativa que tiene un contenido teleológico de profunda justicia y equidad, al garantizarles a las personas trans el ejercicio del derecho a la identidad de género.

Por ello, me parece conveniente y necesario hacer algunas consideraciones en torno a la media sanción, no tanto referidas al articulado que ya fue abordado por los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, sino a las connotaciones sociales que este proyecto tiene.

En primer lugar, no resulta ocioso señalar que nuestro país carece de un marco legal que garantice el derecho a la identidad de género. Ello implica que, conforme al régimen jurídico vigente, cualquier cuestión que se plantee vinculada a la rectificación de partidas de nacimiento, cambio de sexo y nombre en el documento nacional de identidad, terapias o intervenciones quirúrgicas correctivas o reasignativas del sexo, requieren necesariamente la intervención judicial, atento al carácter excepcional de las mismas.

Esta situación somete a la persona a un doble padecimiento, ya que, por un lado, debe soportar el trauma que implica tener una genitalidad que no se corresponde con su identidad y su sentir, y por el otro, se lo revictimiza al obligarlo a desandar un largo camino judicial, plagado de trabas burocráticas, para que se lo autorice, por ejemplo, a someterse a una intervención quirúrgica para la reasignación de sexo.

Asimismo, esta falta de reconocimiento legal, expone a este sector a situaciones de exclusión en casi todos los ámbitos en los que les toca desenvolver su vida cotidiana —laborales, educativos, sanitarios, administrativos, entre otros—. Esta exclusión conduce de manera ineludible a situaciones de violencia social, cultural e institucional.

A la carencia de un marco legal adecuado y tuitivo de las personas trans, se suma la existencia de normas que tienen, ya sea de forma directa o indirecta, un contenido punitivo hacia esta situación. En este sentido puede señalarse como ejemplo el decreto-ley 17.732 que regula el ejercicio profesional de la medicina, y

dispone en el inciso 4º, del artículo 19 la prohibición de realizar intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo de una persona.

Entonces las prácticas médicas, particularmente las intervenciones quirúrgicas reasignativas de sexo, terminan siendo clandestinas, por lo prohibitivo de la transexualidad y lo expulsivo del sistema sanitario, atento a la prohibición antedicha.

Por ello las operaciones de reasignación de sexo se realizan solo por orden judicial, la que llega luego de un bitter procesal extenso y sumamente doloroso para quien lo impulsa.

Decíamos anteriormente que las personas trans se ven sometidas a situaciones de exclusión en los distintos ámbitos en los que se desarrolla su quehacer cotidiano. Así, en el ámbito educativo se observa, tal como surge del informe “Hacia una ley de identidad de género” del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo —INADI—, que en los ámbitos escolares se generan numerosos casos de expulsión explícita o implícita de niñas y niños trans, principalmente dadas por prácticas discriminatorias de pares, padres, madres y en algunos casos de docentes y autoridades.

El informe mencionado continúa señalando que las niñas y niños trans se ven expuestas, en este contexto, a ser nombradas sin que se respete su identidad de género, a no elegir sus prácticas deportivas, al uso de sanitarios que no respetan su identidad de género, entre otras situaciones.

Esta violencia institucional funciona como legitimadora de otras violencias que terminan forzando la deserción educativa. En este sentido, el informe nacional sobre la situación de travestis, transexuales y transgéneros, compilado por Lohana Berkins y editado por ALITT en el año 2007, indica que en materia de deserción escolar, el 39% de los casos se produce por miedo a la discriminación.

En el plano laboral la situación no es mejor. Existe un gran vacío en el empleo formal, ocasionado entre otras cosas por la falta de documentos para travestis, transexuales y transgéneros en los que haya concordancia entre el sexo documentado y la identidad de género de la persona. En realidad ninguna documentación formal refleja la verdadera identidad de género, es decir, no solo se da esta situación en relación al documento nacional de identidad, sino que también sucede con la constancia de CUIT/CUIL, en materia de seguridad social, cobertura médica, etcétera.

El informe nacional antes señalado contiene otros datos que también resultan sumamente preocupantes y dan cuenta de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las personas trans. Así, el 91% de ellos fue víctima de algún tipo de violencia, siendo el 81% objeto de burlas e insultos, el 64,5% de agresiones físicas y el 41,5% de abuso sexual.

Resulta oportuno destacar que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 19, establece: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan

al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. Resulta claro que las cuestiones relacionadas con la identidad de género, en tanto libre vivencia del sujeto en torno a su propio ser, si bien puede escandalizar a las ideologías más conservadoras, en modo alguno lesiona derechos de terceros, razón por la cual cae bajo el ámbito de reserva de la mencionada cláusula constitucional.

Por su parte, el bloque de normas internacionales que integran nuestra Constitución Nacional en virtud del artículo 75, inciso 22 de la misma, contiene previsiones que directa o indirectamente garantizan el derecho a la identidad de género.

Como ejemplo de lo dicho, podemos mencionar el artículo 5° del Pacto de San José de Costa Rica, que reconoce el derecho a la integridad física, psíquica y moral; asimismo, el artículo 11 del citado pacto protege la honra y la dignidad de la persona.

Decíamos previamente que al no existir un marco legal específico que tutele el derecho a la identidad de género, cualquier reclamo para operativizar este derecho reconocido en diversos instrumentos internacionales debía canalizarse necesariamente por la vía del amparo judicial.

La vía judicial, como se sabe, es extremadamente larga y dolorosa para quien solicita, por ejemplo, una autorización para acceder a una intervención quirúrgica de reasignación de sexo. Es decir, que al sufrimiento que viene padeciendo la persona en virtud de no corresponderse el sexo autopercebido con su genitalidad, se le adiciona la angustia que todo proceso judicial acarrea atento a su final incierto, como así también a tener que ventilar en un ámbito completamente extraño y hostil, cuestiones que deberían reservarse, en situaciones normales, a la esfera de la intimidad.

Así fue como muy paulatinamente se comenzaron a instar acciones judiciales en este sentido. Las primeras fueron rechazadas, encontrándose en el año 1993 el primer antecedente judicial de una sentencia que hizo lugar a un cambio de nombre y rectificación de la partida de nacimiento.

A partir del año 2001 se fueron dando nuevos fallos que autorizaron cambios de nombre y sexo registral de personas trans, pero con el previo diagnóstico de “disforia de género”.

Posteriormente, en algunas jurisdicciones se comenzó a reconocer el derecho a la identidad de género, dando lugar a los cambios solicitados sin necesidad de un diagnóstico clínico-psiquiátrico previo.

Lo cierto es que a poco de desandar la lectura de distintas sentencias judiciales dadas en el marco de distintos procesos de amparo incoados para contar con la tutela jurisdiccional del derecho a la identidad de género, se observa con claridad, en base a las declaraciones testimoniales, el enorme padecimiento por el que atraviesan las personas trans en el contexto socio-cultural y normativo que impera en nuestro tiempo.

Así, vale señalar como ejemplo la sentencia judicial del año 2003 emanada del Juzgado en lo Criminal y Correccional de Transición N° 1° de Mar del Plata, causa 3/53.401, “C.A.M. s/acción de amparo”.

Algunos de los pasajes de la sentencia son sumamente ilustrativos y a la vez desgarradores. Así, puede leerse “En relación a su pedido judicial de cambio de sexo relató que sus inclinaciones, propias del sexo femenino, ya surgieron a partir de los 3 o 4 años de edad, situación que se fue acentuando en años posteriores. Recuerda así, por ejemplo, que en primer grado de la escuela primaria se ubicaba en el medio de la fila, ni entre las niñas, ni entre los niños (...). Y fue particularmente durante el período que cursara el secundario cuando recibió todo tipo de discriminaciones por parte de sus compañeros, e incluso de algunos docentes, dificultando así su integración a grupos en la escuela, muchas veces a causa de actitudes impulsadas por los padres de sus propios compañeros. Recordó en tal sentido, que ya en aquel entonces usaba el pelo largo, aunque procuraba utilizar prendas “neutras” como vaqueros, aclarando que sus ropas solían ser algo ajustadas. Asimismo, añadió que durante ese período en el colegio secundario solicitó expresamente ser llamada por su apellido, y nunca por su prenombre masculino, y actualmente es conocida y llamada por el nombre “C”, incluso su madre la llama “hija”.

“La transexualidad genera en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de derechos de raigambre constitucional, que lleva a la persona que la ‘padece’, a una verdadera ‘muerte civil’, sin ver respetados sus derechos a la identidad personal, identidad sexual, al nombre, a la igualdad y la no discriminación, a trabajar, a la seguridad social, a sufragar, a la privacidad, a la salud integral y una adecuada calidad de vida, a la dignidad personal”.

Señor presidente, resulta evidente que es imperioso un cambio contundente en pos de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la identidad de género. Sin embargo, también es pertinente señalar que lo que se necesita es un cambio a nivel sociocultural, ya que la ley que estamos sancionando sólo implicará un avance parcial en tanto no se erradique en todos los estamentos de la sociedad aquellas conductas y prácticas discriminatorias que generan una continua revictimización de las personas trans.

Por los argumentos expuestos, y confiando en que este avance legislativo nos permitirá vivir en una sociedad más justa, tolerante e inclusiva, es que voto afirmativamente la media sanción venida en revisión de la Honorable Cámara de Diputados.

10

SOLICITADA POR EL SEÑOR  
SENADOR MORALES

**Derecho a la identidad de género.**

**(O.D.-269/12)**

Señor presidente:

Debe reivindicarse el desafío cultural que están llevando a cabo los legisladores de cara a la sociedad

desde hace bastante tiempo: la recuperación y concreción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de las leyes que sancionamos; la lucha por los derechos de la mujer; la lucha por los derechos de las comunidades originarias; el tema del matrimonio igualitario y, ahora, la cuestión de la identidad de género. Esta ley está redondita, cierra la cuestión de derechos de la identidad y también está muy bien que aborde la cuestión de la obligación de que el sistema de salud tenga las previsiones que la ley expresa.

Ampliando esta exposición, estoy convencido que es función de los legisladores hacer operativa nuestra Constitución Nacional, adecuando toda la normativa nacional a los principios y tratados de derechos humanos que ésta incorpora.

Por eso hoy estamos dando un nuevo paso en el reconocimiento de derechos de las personas que habitan nuestro país, resolviendo una cuestión urgente, que es la discriminación por la orientación sexual y la identidad de género, que produce numerosas y preocupantes violaciones por homofobia y transfobia.

Las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género real o percibida de las personas constituyen un patrón global. Entre estas violaciones se encuentran los asesinatos, la tortura y los malos tratos, las agresiones sexuales y las violaciones, las injerencias en la privacidad, las detenciones arbitrarias, la negación de empleo o de oportunidades educativas, así como una grave discriminación en el goce de otros derechos humanos, agravadas por la vivencia de otras formas de violencia, odio, discriminación y exclusión.

Para terminar con estas violaciones sistemáticas que excluyen de la vida cívica a importantes cantidades de ciudadanos y ciudadanas es que vengo a defender plenamente esta sanción de la Cámara de Diputados, que recoge las demandas de las organizaciones sociales que luchan por el respeto a la diversidad sexual y muy en particular a las y los militantes de la comunidad transexual.

Estamos convencidos de dar nuestro voto para aprobar este proyecto de ley que permitirá a todas las personas desarrollar su propio plan de vida acorde a su identidad de género, respetando su dignidad, tal cual lo establecen el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en el texto constitucional.

La identidad de género ha sido reconocida en la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos. Nuestro país, junto con sesenta y cinco naciones, ha firmado en el año 2008 y ha presentado ante la Asamblea de las Naciones Unidas documentos contra la discriminación, la violencia y la violación a los derechos humanos, incluyendo la necesidad de remover todo tipo de obstáculos en materia de identidad de género.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes. La orientación sexual y la identidad de

género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso.

Se han producido muchos avances en cuanto a garantizar estos derechos. Son muchos los Estados que en la actualidad tienen leyes y constituciones que garantizan los derechos de igualdad y no discriminación sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género.

Tenemos ya antecedentes en las legislaturas locales. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires ya han avanzado en este sentido. Se han sancionado ordenanzas y decretos en Santa Fe y en Rosario. La Universidad de Buenos Aires ha resuelto reconocer el respeto a la identidad de género en todas sus facultades y se encuentra vigente una resolución del Ministerio del Interior que les permite a las personas colocar la foto en el documento conforme a su identidad de género.

Los diputados y diputadas que trabajaron esta sanción —y aquí debo hacer un reconocimiento expreso a la diputada Vilma Ibarra y al diputado Juan Pedro Tunessi, presidentes ambos de las comisiones que lograron este consenso que hoy tratamos en la Cámara Baja— han tenido como guía los Principios de Yogyakarta. Estos principios fueron desarrollados y adoptados por unanimidad por un distinguido grupo de expertos en derechos humanos de distintas regiones y diversa formación, entre ellos: jueces, académicos, un ex alto comisionado de derechos humanos de la ONU, los procedimientos especiales de la ONU, miembros de órganos de los tratados, ONG y otros. El profesor Michael O'Flaherty, relator del proceso, hizo importantes contribuciones al redactar y revisar los principios de Yogyakarta. Un evento clave para desarrollar los principios fue un seminario internacional que se llevó a cabo en Yogyakarta, Indonesia, en la Universidad de Gadjah Mada del 6 al 9 de noviembre de 2006, y en donde participaron muchos de los expertos en leyes mencionados. En ese seminario se aclararon la naturaleza, el alcance y la implementación de las obligaciones de derechos humanos contraídas por los Estados en relación a la orientación sexual y la identidad de género, en virtud de los tratados y leyes de derechos humanos existentes.

Los Principios de Yogyakarta representan una herramienta fundamental a la hora de que los Estados apliquen los estándares y legislaciones internacionales de derechos humanos dedicados a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género.

Según Yogyakarta, “la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

En el proyecto ley que estamos tratando hoy, se reconoce que hay una responsabilidad compartida para promover y proteger los derechos humanos y de integrar los estándares de Yogyakarta en nuestra legislación con su debido correlato en políticas públicas activas. La protección efectiva de los derechos humanos es verdaderamente responsabilidad de todos y todas.

Haciéndonos cargo de esta responsabilidad y dado que no hay afectación de derechos de terceros ni otros derechos en juego más que la propia identidad y dignidad de las personas, pedimos la sanción de esta ley que permitirá que el Estado argentino reconozca y respete la identidad de género en las leyes, en el documento y en el acceso integral al derecho a la salud.

En primer lugar está la cuestión del derecho al nombre, atributo de la personalidad que se vincula con un derecho personalísimo y con la necesidad de identificar al otro en nuestro sistema de organización ciudadano respetando el valor de la seguridad jurídica, imprescindible para la vida en sociedad.

En este marco, hemos tomado todos los recaudos necesarios, como se hiciera en la legislación vigente en la provincia de Río Negro y en otros países, como Canadá, Francia y España. Se han tenido en cuenta todas las medidas precautorias y se ha resguardado la documentación, que no se da a publicidad, salvo orden judicial o autorización del interesado. No se altera en modo alguno la titularidad de derechos y obligaciones; tampoco se altera el apellido. Además, se mantiene la fecha y el lugar de nacimiento, el número de documento y la misma huella dactilar.

Pero se respeta la identidad de género autopercebida. Por ello, tomando como ejemplo un fallo ejemplar de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires donde el doctor Schlegel señala que no es necesario realizar pericias ni exámenes para establecer la identidad de género y que la práctica de estas pruebas es un indebido escrutinio estatal en la esfera privada de la persona para determinar su identidad de género, no exigimos procedimientos quirúrgicos, diagnósticos ni métodos patologizantes, tal como lo establece la ley de salud mental 26.657, en su artículo 3°, inciso d), que prohíbe hacer diagnósticos en el campo de la salud mental sobre la base de la identidad de género y de la identidad sexual. En el mismo sentido se expiden los Principios de Yogyakarta y Human Rights Watch.

Una vez resuelta la cuestión de la identidad de género en el documento nacional de identidad, la otra cuestión fue resolver que el Estado garantice el acceso a los procedimientos de salud integral, tanto de tratamientos hormonales como quirúrgicos. Para todos los casos se requerirá el consentimiento informado libre, pleno, esclarecido y continuado de las personas mayores de edad y en los casos de las personas menores de 18 años, se actuará en forma acorde a lo establecido en los procedimientos que rigen en la ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061.

Los tratamientos hormonales y quirúrgicos requeridos por las personas objetos de esta ley deben ser prácti-

cas médicas accesibles y garantizadas por el sistema de salud. Esto impedirá o prevendrá que estos tratamientos u operaciones se realicen, como en la actualidad, en forma clandestina e insegura, provocando enfermedades o directamente la muerte de las personas trans y muy especialmente en las personas pobres.

Con respecto a las personas menores de edad, la ley actúa respetando los procedimientos establecidos en la ley 26.061. Cuando nos preguntan por qué legislamos esta opción para niños, niñas y adolescentes es necesario que señalemos que la identidad de género se advierte fuertemente a edades muy tempranas, y que la imposibilidad de resolución efectiva de la misma es causa directa de exclusiones del hogar, discriminación, aislamiento y desprotección.

Recomiendo la atenta lectura del documento “Cuestiones específicas de infancia. El derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes”, realizado por Iñaki Regueiro, miembro de la Asesoría General Tutelar de la ciudad. Allí se establecen parámetros para medir los procedimientos de esta ley respecto de la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Los chicos y chicas podrán cambiar el nombre en su DNI con el consentimiento de sus padres, y sólo en caso de conflicto entre sus intereses y los de sus representantes, intervendrá la autoridad judicial competente. Los niños, niñas y adolescentes serán siempre representados por el abogado del niño, según lo establece el artículo 27 de la ley 26.061, de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que ha de designarse un abogado del niño en todo expediente judicial o administrativo donde los intereses y/o derechos que se encuentren involucrados. Dicho letrado debe garantizar exclusivamente la expresión y defensa de la voluntad del niño.

En los casos de intervención quirúrgica de niños, niñas o adolescentes el proyecto sostiene que, con o sin consentimiento de sus representantes, ha de intervenir un/a juez/a, con asistencia del abogado del niño.

Como bien lo explica el documento de la Asesoría General Tutelar “el derecho a la identidad no sólo implica conocer a la familia de origen y recibir un nombre al nacer, sino que está integrado por una serie de elementos que van evolucionando en cada persona y determinando la identidad. Uno de estos factores es la identidad de género y éste, junto con otros tantos derechos involucrados (libertad, autonomía, integridad personal, etc.), es el principal argumento en el que se sustenta este proyecto. Debe entenderse, continúa diciendo el organismo de la ciudad, que el interés superior es solamente el cumplimiento de todos los derechos del/a niño/a y su ejercicio pleno y efectivo. En este caso, el interés superior consiste en que se respete la identidad de género escogida, vivida, sentida y reclamada por el o la niño o niña”.

Señor presidente, por todos estos puntos que he expuesto pido la sanción de esta ley, como herramienta imprescindible para el reconocimiento de los derechos humanos de todos y todas.